


<div><div>INFORME DE OBSERVACIONES DE LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS DE REGULACIÓN Registro de observaciones a los proyectos de carácter general suscritos por el Superintendente de Industria y Comercio, en atención a lo previsto en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011. De conformidad con el Título II de la Ley Estatutaria 1712 de 2014, el presente documento se garantiza las excepciones de acceso a la información.</div></div>			Código: GJ05-F06 Versión: 3 Fecha: 2024-09-25		
Información general del proyecto					
Área responsable del proceso		Delegatura para la Protección de Datos Personales			
Número del proyecto		Circular sobre el tratamiento de datos personales con fines políticos o electorales, en especial los relacionados con actividades de publicidad, marketing o prospección política y electoral			
Objetivo del proyecto		Analizar a los sujetos obligados de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el debido tratamiento de datos personales en el contexto político y electoral			
Fecha de publicación del proyecto		2025-12-05			
Tiempo total de duración de la publicación		15			
Fecha de inicio		2025-12-05			
Fecha de finalización		2025-12-19			
Ente donde estuvo la consulta pública		https://www.sic.gov.co/identificacion/consultas-publicas/5958			
Canales o medios dispuestos para la difusión del proyecto		Página web de la Superintendencia de Industria y Comercio			
Canales o medios dispuestos para la recepción de comentarios		Correo electrónico: delegaduradp@sic.gov.co			
Resultados de la consulta					
Número de Total de participantes		10			
Número total de comentarios recibidos		10			
Número de comentarios aceptados		10			
Número de comentarios parcialmente aceptados		10			
Número de comentarios no aceptados		10			
Número total de artículos del proyecto		10			
Número total de artículos del proyecto con comentarios		10			
Número total de artículos del proyecto modificados		10			
Consolidado de observaciones y respuestas					
No.	Fecha de recepción	Remitente	Observación recibida	Estado	Respuesta
1	19/12/2025	Fundación para el Estado de Derecho	2.1. Falta de competencia de la SIC al entrometarse en la regulación de publicidad electoral. La observación principal transversal a todo el proyecto es la usurpación de funciones. Las instrucciones impartidas no son meras directrices técnicas sobre seguridad de la información (ámbito propio de la SIC), sino que se tratan de regulaciones sustantivas sobre cómo se debe hacer campaña política.	NO ACEPTADA	<p>La Circular no regula la actividad electoral ni define la forma en que deben desarrollarse las campañas políticas, materias que corresponden a las autoridades electorales en el marco de sus competencias constitucionales y legales. El objeto de las instrucciones se circunscribe de manera exclusiva al tratamiento de datos personales cuando este se realiza con fines políticos o electorales, ámbito respecto del cual la Superintendencia ejerce competencias expresas como Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.</p> <p>En ese sentido, las medidas contenidas en la Circular no introducen reglas sustantivas sobre propaganda, publicidad electoral o estrategias de campaña, sino que reiteran y desarrollan la aplicación del régimen general de protección de datos personales a un contexto específico de tratamiento que presenta riesgos reforzados para los derechos fundamentales de los titulares, en particular cuando involucra datos sensibles, perfilamiento, segmentación o inferencias.</p> <p>Debe recordarse que el artículo 21 de la Ley 1581 de 2012 faculta expresamente a esta Superintendencia para velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales e impartir instrucciones sobre las medidas y procedimientos necesarios para la adecuación de las operaciones de los Responsables y Encargados del Tratamiento a dicha normativa. La Corte Constitucional ha reconocido de manera reiterada que estas funciones hacen parte de la potestad de policía administrativa y comprenden la emisión de instrucciones generales dirigidas a prevenir riesgos y garantizar la efectividad del derecho fundamental al habeas data (sentencias C-1011 de 2009 y C-748 de 2011).</p> <p>Adicionalmente, la Corte Constitucional ha advertido que el tratamiento de datos personales en contextos políticos y electorales puede generar impactos significativos sobre otros derechos fundamentales y sobre el funcionamiento de la democracia, especialmente cuando se utilizan técnicas de segmentación, microsegmentación o inferencia a partir de datos sensibles. En este escenario, resulta no solo legítimo sino necesario que la autoridad de protección de datos precise los estándares mínimos de cumplimiento del régimen de habeas data, sin que ello implique una intromisión en la regulación electoral.</p>
2	19/12/2025	Fundación para el Estado de Derecho	2.1.1. La microsegmentación como núcleo de la estrategia electoral. Las Instrucciones 6 y 7 del proyecto pretenden regular, limitar e incluso prohibir ciertas formas de "perfilamiento" y "segmentación". La circular sostiene que el perfilamiento ideológico está prohibido y que la segmentación debe ser explicada detalladamente al titular. Jurídicamente, la microsegmentación en política es la adaptación digital de una estrategia de campaña tradicional: identificar grupos específicos de electores y dirigirse mensajes diferenciados. Mientras que en el pasado esta labor se realizaba mediante trabajo territorial, estructuras locales y liderazgos comunitarios, en la actualidad se apoya en el uso de datos y herramientas tecnológicas. Al regular la microsegmentación, la SIC está regulando la estrategia electoral en su conjunto. Si la SIC prohíbe a un candidato segmentar su mensaje basándose en inferencias políticas legítimas (ej. enviar propuestas ambientalistas a quienes siguen páginas de mascotas), está interfiriendo directamente en la libertad de ese candidato para difundir su programa (artículo 40, Constitución) y el derecho del elector a recibir información relevante (artículo 20).	ACEPTADA PARCIALMENTE	<p>La Circular no regula el contenido de los mensajes políticos, la definición de agendas programáticas ni las decisiones estratégicas propias de las campañas electorales, materias que permanecen en el ámbito de la autonomía de los actores políticos y de la competencia de las autoridades electorales. El alcance de las instrucciones se circunscribe exclusivamente al tratamiento de datos personales cuando este se utiliza como insumo para actividades de segmentación, personalización o direccionamiento de mensajes políticos.</p> <p>La microsegmentación, entendida como la adaptación de mensajes a públicos específicos, no se encuentra prohibida. Sin embargo, cuando dicha práctica implica el tratamiento de datos personales, y en particular datos personales sensibles o inferencias que permitan revelar la ideología política de los titulares, resulta plenamente aplicable el régimen constitucional y legal de protección de datos personales. En este escenario, la Circular no introduce nuevas restricciones, sino que desarrolla los límites ya previstos en la Ley 1581 de 2012.</p> <p>Por lo anterior, la Superintendencia no acepta la interpretación según la cual la Circular regula la estrategia electoral o vulnera los derechos consagrados en los artículos 20 y 40 de la Constitución Política. No obstante, se acoge parcialmente el comentario, en la medida en que resulta pertinente precisar el alcance del numeral 6, incorporando de forma expresa que el tratamiento de datos personales sensibles con fines de segmentación o perfilamiento político puede realizarse cuando se cuente con la autorización previa, expresa e informada del titular, de conformidad con el régimen de protección de datos personales.</p>
3	19/12/2025	Fundación para el Estado de Derecho	2.1.2. Inaplicabilidad de las normas de protección al consumidor. El proyecto de circular utiliza un lenguaje propio del derecho del consumo ("publicidad", "marketing", "prospección"). Sin embargo, la Corte Constitucional ha diferenciado claramente el discurso comercial del discurso político. i) Discurso comercial: busca una transacción económica. Se rige por la veracidad objetiva. La SIC puede ejercer control y sanción cuando la información suministrada al consumidor resulta falsa, engañosa o no verificable en relación con las características, efectos o resultados del producto o servicio ofrecido. ii) Discurso político: busca la adhesión ideológica. Se rige por los principios de libertad de expresión y libre formación de la opinión pública. No está sujeto a estándares de veracidad objetiva propia del ámbito comercial, ni al control sancionatorio de la SIC respecto del contenido de las promesas políticas o de las decisiones estratégicas sobre a qué audiencias se dirigen los mensajes. La SIC no puede sancionar si un candidato promete "bajar los impuestos" y no lo hace, ni puede regular cómo el candidato decide a quién le hace esas promesas. Al tratar al votante como un consumidor que debe ser "protegido" de la publicidad política dirigida, la SIC desconoce la capacidad de elección y decisión del electorado y aplica un estándar de tutela administrativa que es ajeno a la democracia liberal. El control del discurso político es el debate público o el voto, no la sanción administrativa de una superintendencia.	NO ACEPTADA	<p>La Circular no se fundamenta ni aplica el régimen de protección al consumidor, ni ejerce las competencias previstas en la Ley 1480 de 2011. Las referencias a actividades de "publicidad", "marketing" o "prospección" no responden a categorías propias del derecho del consumo, sino que describen modalidades de tratamiento de datos personales ampliamente reconocidas en el ámbito de la protección de datos, incluidas en instrumentos normativos y doctrinales nacionales e internacionales, y ya utilizadas previamente por esta Superintendencia en contextos no comerciales.</p> <p>El objeto de la Circular no es el control del discurso político ni la evaluación del contenido de mensajes, promesas o programas electorales, aspectos que, como lo señala la respuesta al comentario anterior, se encuentran amparados por la libertad de expresión y la libre formación de la opinión pública. En ningún apartado del proyecto se establecen criterios de veracidad, corrección o cumplimiento de promesas políticas, ni se atribuye a la Superintendencia competencia alguna para sancionar decisiones estratégicas de campaña o el direccionamiento de mensajes desde una perspectiva ideológica.</p> <p>En este sentido, la diferenciación jurisprudencial entre discurso comercial y discurso político no resulta aplicable al análisis planteado, en tanto la Circular no somete el discurso político a estándares de veracidad objetiva ni a controles propios de las relaciones de consumo, sino que desarrolla el alcance del derecho fundamental al habeas data en un contexto particularmente sensible. La protección de datos personales no convierte al elector en consumidor, ni pretende sustituir el debate democrático, sino garantizar que la participación política en entornos digitales no se base en prácticas opacas, no autorizadas o contrarias a la ley en el tratamiento de la información personal.</p>
4	19/12/2025	Fundación para el Estado de Derecho	2.2. Análisis de la construcción sobre "Deepfakes" y la Ley 2502 de 2020. La Instrucción 9 del proyecto de circular ordena a los sujetos vigilados "abstenerse de generar, utilizar, difundir o promover contenidos sintéticos conocidos como deepfakes" y advierte sobre la comisión del delito de falsedad personal agravado, citando la Ley 2502 de 2020. Esta instrucción es, quizás, la más peligrosa desde el punto de vista del debido proceso y la libertad de expresión. 2.2.1. La SIC no es juez penal ni fiscal: La Ley 2502 de 2020 modificó el Código Penal (artículo 296) para incluir como agravante la suplantación mediante Inteligencia Artificial (IA). La aplicación de una conducta como delito corresponde al legislador, y su investigación y juzgamiento a la Fiscalía General de la Nación y a la jurisdicción penal. Que la SIC incluya en una circular administrativa una prohibición basada en un tipo penal implica la usurpación de la función legislativa y judicial. La SIC no tiene competencia para determinar si un video es un deepfake ilícito (suplantación) o una parodia legítima (libertad de expresión). ¿Qué sucede si la SIC ordena retirar un contenido de campaña por considerado deepfake y luego un juez penal determina que no lo era? La SIC habría censurado material de campaña legítimo, alterando el resultado electoral, sin tener competencia para ello. La calificación de la veracidad o falsedad de la propaganda electoral es competencia del CNE (en lo administrativo) o de la justicia penal (en lo delictivo), nunca de la SIC. 2.2.2. Riesgo de censura y efecto disuasivo: La Instrucción 9 es vaga. Prohíbe "generar o utilizar" representaciones que permitan "individualizar" a una persona. En una campaña, el uso de la imagen del contricante es constante y electoralmente legítimo, ya sea para criticarlo o para contrastar propuestas. El uso de herramientas de IA para mejorar la calidad de un video o para crear sátira política podría caer en esta prohibición y configurar censura. La circular podría entonces representar un instrumento de censura indirecta por parte de una entidad de inspección, vigilancia y control. En la medida en que la circular asocia el uso de determinadas tecnologías de edición y generación de contenidos con eventuales sanciones administrativas, se produce un efecto disuasivo sobre el ejercicio de la libertad de expresión política. Ante la incertidumbre sobre el alcance de las prohibiciones y las consecuencias sancionatorias, las campañas pueden optar por abstenerse del uso de herramientas tecnológicas legítimas, aun cuando su empleo no implique desinformación ni suplantación de identidad. Este efecto restrictivo impacta negativamente la deliberación democrática. La regulación de la desinformación y de los contenidos electorales, por su incidencia directa en derechos fundamentales, exige un desarrollo mediante ley estatutaria y no puede ser establecida a través de una circular expedida por una autoridad administrativa de carácter técnico.	NO ACEPTADA	<p>La Circular no tipifica conductas, no crea delitos ni asigna competencias penales a esta Superintendencia. La referencia a la Ley 2502 de 2020 y al artículo 296 del Código Penal tiene un carácter meramente ilustrativo y preventivo, orientado a advertir a los sujetos vigilados sobre los riesgos jurídicos asociados a determinadas prácticas que pueden involucrar el uso indebido de datos personales mediante tecnologías de inteligencia artificial.</p> <p>La Instrucción 9 no habilita a la Superintendencia para calificar penalmente un contenido, ni para determinar la comisión de un delito, facultades que, como correctamente lo señala el comentario, corresponden de manera exclusiva a la Fiscalía General de la Nación y a la especialidad penal. Tampoco atribuye a la SIC la función de evaluar la veracidad, falsedad o licitud penal de piezas de propaganda electoral, ni de resolver controversias sobre parodia, sátira o ejercicio legítimo de la libertad de expresión.</p> <p>El alcance de la Instrucción se limita a recordar que la generación, utilización o difusión de contenidos sintéticos que impliquen la suplantación de una persona identificable mediante el uso de datos personales puede constituir una forma de tratamiento ilícito de datos, además de eventualmente configurar responsabilidades en otros ámbitos del ordenamiento jurídico. En este sentido, la Circular opera en el plano administrativo-preventivo, propio del régimen de protección de datos personales, y no en el plano sancionatorio penal.</p> <p>La Instrucción no regula el uso general de la imagen de personas en campañas políticas, ni prohíbe la crítica, el contraste de propuestas, la sátira, la parodia o el ejercicio legítimo de la libertad de expresión política. Tampoco restringe el uso de herramientas de edición audiovisual o de tecnologías de inteligencia artificial empleadas con fines técnicos o creativos, cuando estas no impliquen la suplantación de identidad.</p> <p>El alcance de la Instrucción se circunscribe de manera expresa a la generación, utilización o difusión de contenidos sintéticos (deepfakes) que involucren datos personales y que induzcan a error mediante la suplantación o atribución falsa de identidad, escenario que presenta riesgos graves para los derechos fundamentales de las personas y para la integridad del debate público. Por otro lado, la Circular no establece mecanismos de censura previa, ni faculta a la Superintendencia para ordenar</p>
5	19/12/2025	Fundación para el Estado de Derecho	2.3. La prohibición del perfilamiento ideológico en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 (violación de la reserva de ley). La Instrucción 6 establece: "No se podrá elaborar perfiles que clasifiquen, evalúen o busquen predecir la ideología política de los titulares... incluida cualquier perfilamiento basado en inferencias". Al respecto, se considera: 2.3.1. Contradicción directa con la Ley 1581 de 2012. Como se expuso en la cuestión previa, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 (artículo 6) permite el tratamiento de datos sensibles (opinión política) si existe autorización expresa. La circular, al decir "No se podrá elaborar perfiles [...]", establece una prohibición absoluta que no contempla la excepción del consentimiento. Esto sería legal. Una circular no puede derogar una ley estatutaria. Si un ciudadano quiere dar su consentimiento para que un partido analice sus datos y le envíe propuestas personalizadas, la ley lo permite. La SIC no puede prohibirlo.	ACEPTADA PARCIALMENTE	<p>La microsegmentación, entendida como la adaptación de mensajes a públicos específicos, no se encuentra prohibida. Sin embargo, cuando dicha práctica implica el tratamiento de datos personales, y en particular datos personales sensibles o inferencias que permitan revelar la ideología política de los titulares, resulta plenamente aplicable el régimen constitucional y legal de protección de datos personales. En este escenario, la Circular no introduce nuevas restricciones, sino que desarrolla los límites ya previstos en la Ley 1581 de 2012.</p> <p>Por lo anterior, la Superintendencia no acepta la interpretación según la cual la Circular regula la estrategia electoral o vulnera los derechos consagrados en los artículos 20 y 40 de la Constitución Política. No obstante, se acoge parcialmente el comentario, en la medida en que resulta pertinente precisar el alcance del numeral 6, incorporando de forma expresa que el tratamiento de datos personales sensibles con fines de segmentación o perfilamiento político puede realizarse cuando se cuente con la autorización previa, expresa e informada del titular, de conformidad con el régimen de protección de datos personales.</p>

6	19/12/2025	Fundación para el Estado de Derecho	<p>2.3.2. Violación del principio de reserva de ley estatutaria.</p> <p>El artículo 152 de la Constitución establece que, mediante leyes estatutarias, el Congreso regulará, entre otras materias, lo relativo a derechos y deberes fundamentales de las personas (como el habeas data y la participación política), así como las funciones electorales, lo cual ha sido reiterado por la Corte Constitucional.</p> <p>Por lo tanto, obligar al perfileo político es regular el núcleo esencial del derecho de los partidos a hacer campaña y del derecho de los ciudadanos a asociarse políticamente. Esta es una materia que debe ser debatida en el Congreso, con mayorías calificadas y revisión constitucional previa. No puede ser decretada por un funcionario administrativo mediante una circular. La SIC está legislando por vía administrativa sobre derechos fundamentales, lo cual vicia de nulidad la circular.</p>	NO ACEPTADA	<p>La circular no crea una prohibición nueva ni regula derechos fundamentales en abstracto, sino que interpreta y aplica el régimen vigente de protección de datos personales, contenido en normas con rango de ley estatutaria.</p> <p>La elaboración de perfiles, en sí misma, no está prohibida por el ordenamiento jurídico colombiano. Lo que se encuentra prohibido es el tratamiento de datos sensibles sin la autorización previa, expresa e informada del titular. En Colombia, el tratamiento de datos sensibles está prohibido como regla general, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012.</p> <p>Por lo anterior, no existe violación del principio de reserva de ley estatutaria ni usurpación de funciones legislativas. La circular constituye un ejercicio legítimo de la competencia administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio, orientado a aplicar y precisar obligaciones ya definidas por el Congreso de la República y avaladas por la Corte Constitucional.</p>
7	19/12/2025	Fundación para el Estado de Derecho	<p>2.4. La exigencia de transparencia algorítmica y el secreto estratégico.</p> <p>Las instrucciones 7 y 8 obligan a revelar la "lógica general", los "criterios de segmentación" y las "fuentes de los datos", y a mantener un registro documental a disposición de la SIC. Esta exigencia desconoce la naturaleza competitiva del proceso electoral. La estrategia de segmentación (a quién le hablo, qué temas priorizo y en qué barrio) es el equivalente al secreto industrial o comercial en una empresa. Obligar a un partido a revelar sus criterios de segmentación es obligarlo a revelar su estrategia de campaña a la autoridad administrativa.</p> <p>Si bien la transparencia es deseable, debe ponderarse con el derecho a la privacidad estratégica de las organizaciones políticas. Aun cuando la SIC tenga competencia para el control y la vigilancia en materia de tratamiento de datos personales, la circular excede los límites del ejercicio de sus funciones en actividades que componen la confidencialidad electoral, incentiva la autocensura y genera inseguridad jurídica frente a los sujetos vigilados.</p> <p>En el Reino Unido7, la ICO (Information Commissioner's Office) ha emitido guías sobre el uso de datos en campañas, pero siempre respetando el marco legal y sin imponer cargas de revelación que anulen la competitividad. La SIC pretende ir más allá de los estándares internacionales, imponiendo una transparencia radical que puede ser utilizada como herramienta de espionaje político administrativo.</p>	NO ACEPTADA	<p>El planteamiento confunde dos planos jurídicos distintos: la transparencia en el tratamiento de datos personales y la divulgación pública de la estrategia política o electoral. La circular no obliga a revelar la estrategia de campaña ni a exponer públicamente criterios de segmentación electoral frente a terceros o competidores políticos.</p> <p>Las instrucciones 7 y 8 se limitan a exigir que el responsable del tratamiento informe al titular de los datos y documente internamente, para efectos de control y vigilancia, aspectos mínimos como la lógica general del tratamiento, las fuentes de los datos y los criterios de segmentación utilizados. Esta exigencia no equivale a la revelación del "know-how" electoral, ni mucho menos a la exposición del mensaje, narrativa o táctica política de la campaña.</p> <p>La noción de "lógica general", ampliamente utilizada en estándares internacionales de protección de datos, no implica la divulgación del algoritmo, del modelo exacto, ni de la estrategia política subyacente, sino una explicación comprensible que permita al titular entender por qué y para qué se tratan sus datos, en cumplimiento de los principios de transparencia y responsabilidad demostrada (accountability). En ningún caso se exige la entrega de fórmulas, ponderaciones específicas, mensajes de campaña ni planes territoriales.</p> <p>Por otra parte, la documentación a disposición de la SIC responde a una obligación clásica de cualquier régimen de protección de datos: permitir la verificación del cumplimiento normativo por parte de la autoridad competente. Esta información no es pública, está amparada por el deber de reserva administrativa y no puede ser utilizada como mecanismo de "espionaje político", afirmación que carece de sustento jurídico y desconoce el marco de confidencialidad que rige las actuaciones de la Superintendencia.</p> <p>La SIC actúa dentro de su mandato legal al exigir medidas de transparencia y trazabilidad en uno de los escenarios de mayor riesgo para los derechos fundamentales, como lo es el uso de datos personales y técnicas de perfileo en campañas electorales. La protección del habeas data no puede quedar neutralizada por la sola invocación de la "estrategia política", del mismo modo que en el sector privado el secreto empresarial no legitima tratamientos opacos o ilegales de datos.</p> <p>El argumento parte de una premisa incorrecta: que las dinámicas informales de la actividad política pueden justificar el tratamiento de datos personales sin autorización del titular. En el ordenamiento jurídico colombiano, la realidad social no deroga la ley, y menos cuando se trata de derechos fundamentales como el habeas data.</p> <p>La instrucción 4 de la Circular no introduce una carga nueva ni desproporcionada, sino que reitera una obligación legal preexistente: obtener autorización previa, expresa e informada del titular para el tratamiento de sus datos personales, conforme a los artículos 4, 9 y 12 de la Ley 1581 de 2012. Agregar a una persona a un grupo de WhatsApp o a una lista de distribución constituye tratamiento de datos personales, pues implica recolección, uso y circulación de información asociada a una persona identificable, incluido su número telefónico.</p> <p>La "espontaneidad" de la participación política no elimina la necesidad de consentimiento, del mismo modo que la informalidad comercial no elimina las obligaciones en materia de protección de datos. La ley no exige una "autorización solemne" ni un formato específico, pero sí una manifestación clara y verificable de la voluntad del titular.</p>
8	19/12/2025	Fundación para el Estado de Derecho	<p>2.5. La regulación de grupos de mensajería (WhatsApp) y la realidad política. La instrucción 4 de la Circular dispone que los sujetos vigilados deben abstenerse de agregar personas a grupos de mensajería instantánea o listas de distribución "sin verificar previamente la existencia y validez de una autorización".</p> <p>Esta exigencia resulta inaplicable en el contexto real de la actividad política y desconoce las formas ordinarias de organización y participación ciudadana. Una parte relevante de la motivación política se desarrolla a través de canales directos, relaciones de confianza y espacios comunitarios, en los que la comunicación se produce de manera espontánea y continua, sin que medie necesariamente una autorización formal documentada para cada interacción.</p> <p>La instrucción tampoco se armoniza con la excepción prevista en el artículo 6, literal c), de la Ley 1581 de 2012, que permite el tratamiento de datos sensibles en el marco de actividades legítimas de organizaciones políticas respecto de sus miembros o de personas que mantienen contacto regular por razón de dicha finalidad. El proyecto de circular no precisa como se articula esta excepción con la prohibición general que introduce, lo que genera incertidumbre sobre su alcance y aplicación.</p> <p>Al imponer una carga de autorización previa de carácter documental para dinámicas comunicativas básicas, la circular introduce una restricción que puede resultar desproporcionada frente al derecho a la participación política y al ejercicio de la actividad política de base, al prohibir formas legítimas de activismo digital que no implican prácticas abusivas ni desleales en el tratamiento de datos personales.</p>	NO ACEPTADA	<p>Tampoco es acertada la invocación del artículo 6, literal c), de la Ley 1581 de 2012. Esta excepción excluye únicamente el tratamiento de datos sensibles realizado por organizaciones políticas respecto de sus miembros o de personas que mantienen contacto regular con ellas, siempre que el tratamiento se limite a sus finalidades estatutarias y no se suministre a terceros. No habilita, en ningún caso, la incorporación unilateral de personas a grupos de mensajería, ni el tratamiento de datos de simpatizantes, ciudadanos o contactos ocasionales sin autorización previa.</p> <p>Por el contrario, la práctica de agregar personas sin su consentimiento expreso ha sido reiteradamente cuestionada por la Superintendencia de Industria y Comercio y constituye una de las formas más frecuentes de vulneración del principio de libertad en el tratamiento de datos personales. La circular no prohíbe el activismo digital ni la comunicación política de base; prohíbe hacerlo sin consentimiento, que es algo muy distinto.</p>
9	19/12/2025	Fundación para el Estado de Derecho	<p>4. Expedición irregular del acto mediante por usar la forma de "circular" eludiendo el procedimiento de expedición de actos administrativos de carácter general.</p> <p>El proyecto examinado presenta un vicio de expedición irregular, al adoptar la forma de circular para introducir disposiciones de carácter general, abstracto y obligatorio que innovan el ordenamiento jurídico, establecen prohibiciones, imponen cargas nuevas a los destinatarios y restringen el ejercicio de derechos fundamentales, en particular el habeas data, la libertad de expresión política y la participación democrática.</p> <p>Si bien el proyecto cuenta formalmente con un documento denominado "Questionario de Planeación Normativa", dicho instrumento no satisface los estándares materiales exigidos por el Decreto 1081 de 2015 para la expedición de actos administrativos de contenido regulatorio. La memoria se limita a afirmar la competencia de la Superintendencia y la inexistencia de reserva de ley, sin realizar un análisis sustantivo y diferenciado del alcance real de las disposiciones proyectadas, de su impacto sobre derechos fundamentales ni de su incidencia directa en actividades constitucionalmente protegidas, como la propaganda y la contienda electoral.</p> <p>Existe, además, una contradicción insalvable entre la calificación formal del proyecto como una "circular de instrucción" y su naturaleza material como acto regulatorio nuevo, general y restrictivo. El propio documento de planeación reconoce que no existe una norma previa que regule de manera general el tratamiento de datos personales con fines políticos o electorales, razón por la cual se resulta la expedición un acto "nuevo", lo que resulta incompatible con la figura de la circular como instrumento meramente interpretativo o instructivo. En estas condiciones, la utilización de la forma de circular desnaturaliza el instrumento, elude los controles propios de la producción normativa reforzada y configura un uso indebido de la forma del acto administrativo, al emplearse para ejercer una potestad regulatoria que no corresponde a la SIC ni por la materia regulada ni por el instrumento normativo escogido.</p> <p>En consecuencia, el vicio identificado no es meramente formal, sino sustancial, pues compromete la validez del acto por expedición irregular, motivación insuficiente y desconocimiento de los límites constitucionales y legales que rigen la actuación administrativa en materias sometidas a reserva de ley y a competencias preferentes de otras autoridades.</p>	NO ACEPTADA	<p>El cargo parte de una caracterización errónea de la naturaleza jurídica de la circular proyectada y del alcance de las competencias de la Superintendencia de Industria y Comercio. La utilización de la forma de circular de instrucción no constituye, por sí misma, un vicio de expedición irregular cuando se acoge se limita a impartir directrices generales, criterios interpretativos y lineamientos operativos para la aplicación de un régimen legal vigente, como ocurre en el presente caso.</p> <p>La circular no innova el ordenamiento jurídico, no crea un régimen normativo autónomo ni establece prohibiciones nuevas. Las obligaciones que desarrolla, autorización previa, transparencia, deber de información, responsabilidad demostrada, derivan directamente de la Ley 1581 de 2012 y de sus decretos reglamentarios, cuyo cumplimiento resulta exigible con independencia de la expedición del acto. En este sentido, la circular cumple una función clásica de interpretación administrativa y de orientación a los sujetos vigilados, ampliamente reconocida por la jurisprudencia constitucional-estatal.</p> <p>La ausencia de un análisis de impacto regulatorio reforzado no configura, por sí sola, un vicio de nulidad cuando no se está ante la creación de regulación nueva ni ante la imposición de cargas adicionales a las previstas en la ley.</p>
10	19/12/2025	ANDI	<p>4. Sobre las instrucciones 2 y 4.</p> <p>Solicitamos respetuosamente que se incluya en estas instrucciones que el otorgamiento de autorización para el tratamiento de sus datos personales también se considera válido si se realiza por medio de conductas inequívocas por parte del Titular, y no únicamente por medio de autorización expresa.</p> <p>Estas instrucciones desconocen que la autorización por parte del Titular para el tratamiento de sus datos personales, además de poder ser expresa, conforme al artículo 7 del Decreto 1377 de 2013, también puede otorgarse mediante conductas inequívocas del Titular, manteniendo la exigencia de autorización explícita para los casos de tratamiento de datos sensibles, tal y como lo prevé el marco normativo de protección de datos personales actual. Dicha exigencia no debe extenderse al resto de categorías de datos personales que pueden intervenir en el tratamiento con fines políticos y electorales y cuya autorización puede válidamente otorgarse mediante conductas inequívocas por parte del Titular. Cualquier interpretación distinta implicaría introducir, por vía administrativa, una carga adicional no contemplada por el legislador estatutario y generaría un estándar más estricto que el establecido en el régimen vigente.</p> <p>Así mismo, solicitamos respetuosamente la eliminación del término "líbre" utilizado en ambas instrucciones para calificar la autorización del Titular. Este calificativo no es utilizado por la Ley 1581 de 2012 ni por el Decreto 1377 de 2013 como elemento autónomo o adicional de la autorización, por lo que, su introducción supone incorporar una noción no prevista. Además, su alcance resulta indefinido y ambiguo, lo que podría generar inseguridad jurídica tanto para los Responsables y Encargados del Tratamiento, como para los propios Titulares, al no contar con un parámetro normativo claro sobre su significado y forma de cumplimiento.</p>	ACEPTADA PARCIALMENTE	<p>Se acoge parcialmente la observación. No obstante, la doctrina reiterada y consistente de la Superintendencia de Industria y Comercio ha interpretado que el tratamiento de datos personales sensibles requiere autorización expresa, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012. En consecuencia, el tratamiento de datos personales sensibles, que por regla general se encuentra prohibido y cuya prohibición solo puede levantarse en los casos expresamente previstos por la ley, exige como mínimo la autorización previa y expresa del Titular, sin que sea jurídicamente admisible su obtención mediante conductas inequívocas.</p> <p>Respecto del uso del término "líbre", se acoge la observación y se elimina dicha expresión, sin que ello implique la alteración de los requisitos sustanciales de validez de la autorización establecidos en el régimen vigente de protección de datos personales.</p>
11	19/12/2025	ANDI	<p>5. Sobre la instrucción 3. Solicitamos respetuosamente la eliminación del término "de manera visible" utilizado en esta instrucción. Ni la Ley 1581 de 2012 ni el Decreto 1377 de 2013 exigen que la política de Tratamiento de datos personales, los avisos de privacidad o los mecanismos de autorización se exhiban "de manera visible" en todos los canales de recolección. El Decreto 1377 se limita a establecer que: (i) las políticas de tratamiento deben constar en medio físico o electrónico, en lenguaje claro y sencillo y ser puestas en conocimiento de los Titulares; (ii) cuando no sea posible poner a disposición las políticas, el Responsable debe informar mediante aviso de privacidad sobre su existencia y la forma de acceder a ellas, a más tardar al momento de la recolección; y (iii) el aviso y las políticas pueden difundirse por diversos medios (documentos, formatos electrónicos, medios verbales o cualquier otra tecnología), siempre que se garantice el deber de informar, y que los procedimientos para el ejercicio de derechos "deben darse a conocer o ser fácilmente accesibles" para los Titulares. En ningún caso la norma eleva la "visibilidad" de dichos instrumentos a un estándar adicional o autónomo de cumplimiento.</p> <p>La introducción del calificativo "de manera visible" crea un requisito nuevo, sin definición legal ni parámetros objetivos sobre su alcance, que puede interpretarse de forma ambigua, por ejemplo, en cuanto al tamaño, ubicación o forma de presentación en interfaces físicas o digitales. Nuevamente, esto genera inseguridad jurídica para Responsables y Encargados al no existir un criterio normativo claro sobre cuándo se considera satisfecho. Desde esta perspectiva, resulta alineado al marco vigente mantener los estándares ya previstos por la Ley y el Decreto, en cuanto al deber de informar, ser puestas en conocimiento, y ser fácilmente accesibles, sin adicionar exigencias no contempladas.</p>	ACEPTADA PARCIALMENTE	<p>Se acoge parcialmente la observación.</p> <p>El uso del término "de manera visible" no pretende introducir un requisito autónomo ni adicional a los previstos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, sino reforzar el cumplimiento efectivo del deber de informar, en armonía con los estándares legales vigentes. En particular, debe interpretarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1581 de 2012, según el cual la información suministrada al Titular deberá ser de fácil lectura, no presentar barreras técnicas que impidan su acceso y corresponder en un todo a aquella que repose en la base de datos.</p> <p>En ese sentido, la referencia a la "visibilidad" se entiende como una concreción funcional de los criterios de accesibilidad, claridad y disponibilidad efectiva de la información, ya previstos en la normativa vigente, y no como la imposición de parámetros formales adicionales relacionados con tamaño, ubicación o diseño de los mecanismos de información.</p>

12	19/12/2025	ANDI	<p>c. Sobre la instrucción 6. Solicitamos respetuosamente que esta instrucción sea eliminada, por cuanto desconoce tanto la definición legal del concepto de datos sensibles como la existencia de excepciones a la prohibición de su tratamiento expresamente previstas por la ley.</p> <p>Por un lado, en aplicación del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, el tratamiento de datos sensibles se encuentra permitido bajo determinados supuestos, entre ellos, que el Titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento. Por lo tanto, siempre que medie debida autorización por parte del Titular para el fin que corresponda, se podrán elaborar, o cuando resulte aplicable alguna de las demás excepciones legales. En ese sentido, la instrucción no pretende establecer una prohibición absoluta frente al tratamiento de datos sensibles ni frente a la elaboración de perfiles relacionados con ideología u opiniones políticas, siempre que dicho tratamiento se encuentre debidamente legitimado en los términos previstos por la ley.</p> <p>En consecuencia, esta instrucción implicaría restringir de manera legítima actividades que la propia Ley 1581 de 2012 permite a los Responsables y Encargados del tratamiento, siempre que cuenten con autorización explícita y cumplan las demás obligaciones del régimen de protección de datos personales. Ello, además, sobredita la competencia de la SIC, cuya función se limita a impartir instrucciones para la adecuada aplicación de la ley, mas no a prohibir o limitar usos que el legislador ha previsto como jurídicamente admisibles bajo condiciones específicas.</p> <p>Así mismo, precisamos que la Ley 1581 de 2012 no reconoce la categoría de "datos sensibles inferidos, deducidos o predichos". El artículo 5 de la Ley define de manera delimitada qué debe entenderse por dato sensible, de forma que su alcance no puede ampliarse por vía de circular para incluir hipótesis no contempladas. Al afirmar que la misma prohibición se aplica a datos que "se infieren, deducen o predicen a partir de datos que, de manera aislada, no son sensibles", la instrucción introduce una categoría nueva que sobredita la definición legal y termina modificando el contenido material del concepto de dato sensible, en contravía de la reserva de ley establecida en materia de derechos fundamentales y de las competencias estrictamente reguladas de la SIC.</p> <p>En todo caso, no existe una prohibición legal frente a la elaboración de perfiles, segmentaciones o inferencias como formas de tratamiento de datos que de manera aislada no son sensibles, como, por ejemplo, los datos de naturaleza pública. La norma se limita a someter todo tratamiento de datos personales al cumplimiento de los principios de finalidad, libertad, transparencia, acceso y circulación restringida, entre otros, y a exigir autorización previa e informada del Titular (salvo en los casos en que expresamente la exceptúa). Ni la Ley 1581 ni el Decreto 1377 introducen una prohibición específica respecto de perfiles contruidos a partir de datos no sensibles, siempre que se respeten dichos principios y deberes. En consecuencia, la instrucción proyectada estaría creando una restricción nueva no prevista por el legislador para este tipo de Tratamientos.</p>	NO ACEPTADA	<p>No se acepta la observación. Conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, el tratamiento de datos sensibles se encuentra, como regla general, prohibido, salvo en los eventos expresamente previstos por la ley, entre ellos, cuando el Titular ha otorgado autorización previa, expresa e informada, o cuando resulte aplicable alguna de las demás excepciones legales. En ese sentido, la instrucción no pretende establecer una prohibición absoluta frente al tratamiento de datos sensibles ni frente a la elaboración de perfiles relacionados con ideología u opiniones políticas, siempre que dicho tratamiento se encuentre debidamente legitimado en los términos previstos por la ley.</p> <p>Esta precisión no introduce una categoría nueva de datos sensibles, ni amplía la definición contenida en el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012. Por el contrario, responde a una aplicación funcional del concepto de tratamiento de datos personales, conforme a la cual el análisis debe recaer sobre el resultado y los efectos del tratamiento, y no exclusivamente sobre la naturaleza formal de los datos de entrada. En consecuencia, cuando el resultado del tratamiento permita identificar o inferir ideología política u otros atributos sensibles, dicho resultado queda sujeto a las reglas propias de esta categoría.</p> <p>Así mismo, la instrucción no desconoce la licitud general del perfilamiento ni de la segmentación basados en datos personales no sensibles, incluidos los datos de naturaleza pública. Estas prácticas continúan siendo jurídicamente admisibles, siempre que se realicen en cumplimiento de los principios y deberes establecidos en la Ley 1581 de 2012 y su normativa reglamentaria, y cuenten con la base de legitimación correspondiente.</p>
13	19/12/2025	ANDI	<p>d. Sobre las instrucciones 7 y 8. Solicitamos respetuosamente la supresión de estas instrucciones.</p> <p>Por un lado, los principios de libertad y transparencia de la Ley 1581 de 2012 se relacionan con la necesidad de consentimiento del Titular para el tratamiento de sus datos o de un mandato legal o judicial que releve el consentimiento, y el derecho del Titular a obtener en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernen.</p> <p>Consecuentemente, no es razonablemente de estos principios, ni lo establece la Ley 1581 de 2012 ni el Decreto 1377 de 2013, que existan las obligaciones para los Responsables y/o Encargados de estar en la capacidad de garantizar la comprensión del Titular sobre cómo se estructuró el uso de sus datos para la elaboración de mensajes políticos, así como tampoco información de alta complejidad como "los criterios aplicados para la segmentación, las categorías de datos personales utilizadas, la lógica general empleada para definir los grupos destinatarios, la fuente de los datos, el tipo de segmentación realizada, y si en el proceso se emplearon sistemas de inteligencia artificial", ni mucho menos mantener un registro documental de los criterios de segmentación utilizados en cada campaña digital.</p> <p>Por el contrario, el artículo 5 del Decreto 1377 de 2013 y el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012, únicamente exigen que el Responsable del Tratamiento informe de manera clara y expresa los datos personales que serán recolectados, el tratamiento al cual serán sometidos y la finalidad del mismo.</p> <p>Desde una perspectiva práctica, exigir este nivel de detalle sobre la forma en que se estructuran los mensajes políticos, impone una carga operativa y técnica significativa para partidos políticos, campañas, movimientos ciudadanos, organizaciones sociales y demás Responsables y Encargados que realizan actividades de publicidad, marketing o prospección política y electoral. Este tipo de exigencias afectaría de manera injustificada la planificación y ejecución de campañas, dificultaría la gestión eficiente de bases de datos y podría desincentivar el uso responsable de herramientas tecnológicas que facilitan la comunicación con los ciudadanos y la difusión de información programática.</p> <p>Estas medidas podrían entenderse como buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas que pueden ser adoptadas voluntariamente por los Responsables y Encargados que así lo consideren adecuado para sus modelos de gestión de datos y de comunicación política, mas no como un deber jurídico exigible. Imponerlos como obligación general a través de una circular excede el marco legal vigente, introduce cargas adicionales no previstas por las normas de protección de datos y desconoce el impacto que tales requerimientos tendrían en términos de recursos, capacidades técnicas y operación de las actividades legítimas de comunicación política y electoral.</p> <p>Por lo anterior, consideramos respetuosamente que no es procedente imponer estas obligaciones.</p>	ACEPTADA PARCIALMENTE	<p>La instrucción 7 se mantiene y la instrucción 8 se elimina. Estas instrucciones desarrollan el principio de transparencia y el deber de información previstos en la Ley 1581 de 2012, particularmente en contextos de tratamiento de datos personales con fines políticos y electorales, en los cuales existe un mayor riesgo de afectación a los derechos fundamentales de los Titulares.</p> <p>En efecto, la exigencia de informar de manera clara, comprensible y accesible aspectos generales como los criterios aplicados para la segmentación, las categorías de datos personales utilizadas, la fuente de los datos, el tipo de segmentación realizada, la lógica general del tratamiento y el eventual uso de sistemas de inteligencia artificial, no implica la divulgación de estrategias políticas, modelos algorítmicos ni información técnica compleja. Se trata de información orientada a permitir que el Titular comprenda por qué y para qué se utilizan sus datos y pueda ejercer su derecho a tener informada sus derechos, en concordancia con los artículos 11 y 12 de la Ley 1581 de 2012.</p> <p>La documentación a disposición de la SIC responde a una obligación clásica de cualquier régimen de protección de datos: permitir la verificación del cumplimiento normativo por parte de la autoridad competente. La SIC actúa dentro de su mandato legal al exigir medidas de transparencia y trazabilidad en uno de los escenarios de mayor riesgo para los derechos fundamentales, como lo es el uso de datos personales y técnicas de perfilamiento en campañas electorales.</p> <p>No obstante, se acoge la observación en lo relativo a la exigencia de mantener un registro documental específico de los criterios de segmentación utilizados, por cuanto dicha obligación podría interpretarse como una carga adicional no expresamente prevista en el régimen legal vigente de protección de datos personales. En consecuencia, se elimina la referencia al registro documental, sin perjuicio de las demás obligaciones generales de los Responsables y Encargados de demostrar el cumplimiento de la ley cuando ello sea requerido por la autoridad competente, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control.</p>
14	19/12/2025	ANDI	<p>e. Sobre la instrucción 9. Consideramos respetuosamente que la redacción actual (i) impone obligaciones de resultado que no son compatibles con el principio de responsabilidad demostrada ni con el rol de las plataformas como intermediarios tecnológicos y (ii) se refiere a escenarios que ya son regulados en la regulación vigente tanto en el marco penal como de consumidor.</p> <p>i. Obligación de resultado. En relación con la obligación incluida en el proyecto de circular para los sujetos vigilados de "abstenerse de generar, utilizar, difundir o promover contenidos sintéticos conocidos como deepfakes que involucren datos personales", consideramos que su redacción implica una obligación de resultado que no es proporcional con el régimen de protección de datos establecido en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1377 de 2013.</p> <p>La obligación de resultado que se impone en el proyecto de circular no es coherente con el principio de responsabilidad demostrada establecido en el artículo 26 del Decreto 1377 de 2013. Este artículo exige que los responsables del tratamiento sean capaces de demostrar que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones establecidas en el régimen de protección de datos. Además, las medidas deben ser proporcionales a la naturaleza jurídica del responsable, la naturaleza de los datos, el tratamiento y los riesgos potenciales sobre los derechos del Titular. En este sentido, la responsabilidad demostrada se configura como una obligación de medios, orientada a probar la debida diligencia en la prevención, detección y corrección de riesgos.</p> <p>Sin embargo, el proyecto de circular tratada de manera generalizada a todos los sujetos vigilados, con independencia de su rol o capacidad de control, un riesgo desproporcionado y materialmente imposible de garantizar, en particular frente a contenidos generados y difundidos por terceros, lo cual sobredita el alcance normativo del principio de responsabilidad demostrada.</p> <p>Bajo esta misma perspectiva, es importante resaltar que la instrucción 9 implica una obligación de resultado para las plataformas tecnológicas por los contenidos generados por terceros con fines políticos o electorales, en especial los relacionados con actividades de publicidad, marketing o prospección política y electoral. Sin embargo, las plataformas actúan como intermediarios de servicios de la sociedad de la información, cuya función es esencialmente tecnológica y neutral, limitada a facilitar la transmisión, alojamiento o difusión de contenidos creados por otros. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que las plataformas:</p> <p>"tienen un rol dual: i) pasivo facilitando el proceso de transmisión y difusión de un contenido más no toman decisiones sobre la difusión, es decir, "don acceso, alojamiento transmisión e indexación a contenidos, producto y servicios, que se originan en terceros", escenario donde facilitan la libertad de expresión; y ii) activo en la medida que pueden adoptar un modelo de negocios basado en datos, lo que implica que "a partir de la recolección y análisis descriptivo y prescriptivo de los datos de sus usuarios, las compañías como Facebook y Google formulan "modelos de negocios que confían en los datos como un recurso clave para extraer valor económico social".</p>	ACEPTADA	<p>Se elimina la instrucción sobre contenido sintético ultra falso (deepfakes). Se acoge el comentario que sugiere su eliminación, si bien se sugirieron alternativas intermedias también. El alcance de la instrucción se limita a recordar que la generación, utilización o difusión de contenidos sintéticos que impliquen la suplantación de una persona identificable mediante el uso de datos personales puede constituir una forma de tratamiento ilícito de datos, además de eventualmente configurar responsabilidades en otros ámbitos del ordenamiento jurídico. Sin embargo, se opta por su eliminación.</p>
15	19/12/2025	ECUJA	<p>ii. Definición de sujetos vigilados. El documento no indica cuáles son los sujetos vigilados. Solo en la instrucción decima se menciona a partidos y movimientos políticos, lo que puede generar interpretaciones restrictivas. Sería conveniente incluir desde el inicio una definición ilustrativa (no exhaustiva) de los sujetos a los que aplica la circular: candidatos, partidos y movimientos políticos, organizaciones de veeduría política, comités promotores, entre otros. Esto daría mayor certeza y evitaría interpretaciones que excluyan actores relevantes.</p>	ACEPTADA	<p>Se acoge el comentario y se fortalece la definición de los sujetos a quienes está dirigida la circular en la instrucción 1, con el fin de brindar mayor claridad y seguridad jurídica sobre su ámbito de aplicación.</p>
16	19/12/2025	ECUJA	<p>Tratamiento de datos de naturaleza pública. En la instrucción 4, sería importante mencionar expresamente el uso de datos públicos en estas prácticas. La Autoridad ha sostenido que el web scraping es posible sin autorización, siempre que se trate de datos de naturaleza pública. Si esta postura se mantiene, convendría dejarlo explícito: si cambia, advertirlo claramente.</p> <p>Redes sociales como canal político: Hoy en día, las redes sociales constituyen el principal medio de interacción entre políticos, organizaciones y ciudadanos, por lo que resulta fundamental que la circular reconozca expresamente su relevancia en la comunicación política contemporánea.</p> <p>Además, sería conveniente que la Delegatura precise los criterios bajo los cuales un usuario de una red social podría ser considerado Responsable del tratamiento de datos personales, dado el impacto que estas plataformas tienen en la difusión de mensajes y en la segmentación de audiencias. Incluir esta referencia permitiría no solo dar claridad sobre el alcance normativo en entornos digitales, sino también ofrecer lineamientos aplicables en casos recientes, como la decisión de rechazo del bloque de Fajardo.</p>	ACEPTADA	<p>Con el fin de brindar mayor claridad y coherencia con el marco normativo vigente y con la doctrina elaborada de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ajusta la instrucción 4 para incorporar expresamente el tratamiento de datos de naturaleza pública.</p> <p>Se reconoce que las redes sociales digitales constituyen hoy uno de los principales canales de comunicación, interacción y difusión de mensajes políticos, y que su uso tiene una incidencia directa en el tratamiento de datos personales con fines políticos y electorales. En ese sentido, la circular se entiende aplicable al tratamiento de datos personales que se realice a través de redes sociales y demás plataformas digitales, en la medida en que dicho tratamiento se efectúe con fines políticos o electorales.</p> <p>No obstante, la presente circular no tiene por objeto definir de manera general los criterios para determinar cuándo un usuario de una red social adquiere la calidad de Responsable o Encargado del Tratamiento, ni regular de forma integral las dinámicas propias de las plataformas digitales. Dicha determinación debe efectuarse caso a caso, con base en los criterios establecidos en la Ley 1581 de 2012, atendiendo al grado de decisión y control efectivo sobre la finalidad y los medios del tratamiento de datos personales.</p>
17	19/12/2025	ECUJA	<p>Uso de inteligencia artificial con datos sintéticos. El documento no indica cuáles son los sujetos vigilados. Solo en la instrucción decima se menciona a partidos y movimientos políticos, lo que puede generar interpretaciones restrictivas. Sería conveniente incluir desde el inicio una definición ilustrativa (no exhaustiva) de los sujetos a los que aplica la circular: candidatos, partidos y movimientos políticos, organizaciones de veeduría política, comités promotores, entre otros. Esto daría mayor certeza y evitaría interpretaciones que excluyan actores relevantes.</p>	NO ACEPTADA	<p>Se elimina la instrucción sobre contenido sintético ultra falso (deepfakes). Se acoge el comentario que sugiere su eliminación, si bien se sugirieron alternativas intermedias también. El alcance de la instrucción se limita a recordar que la generación, utilización o difusión de contenidos sintéticos que impliquen la suplantación de una persona identificable mediante el uso de datos personales puede constituir una forma de tratamiento ilícito de datos, además de eventualmente configurar responsabilidades en otros ámbitos del ordenamiento jurídico. Sin embargo, se opta por su eliminación.</p>
18	19/12/2025	ECUJA	<p>Uso de inteligencia artificial con datos sintéticos. El documento no indica cuáles son los sujetos vigilados. Solo en la instrucción decima se menciona a partidos y movimientos políticos, lo que puede generar interpretaciones restrictivas. Sería conveniente incluir desde el inicio una definición ilustrativa (no exhaustiva) de los sujetos a los que aplica la circular: candidatos, partidos y movimientos políticos, organizaciones de veeduría política, comités promotores, entre otros. Esto daría mayor certeza y evitaría interpretaciones que excluyan actores relevantes.</p>	ACEPTADA PARCIALMENTE	<p>Se elimina la instrucción sobre contenido sintético ultra falso (deepfakes). Se acoge el comentario que sugiere su eliminación, si bien se sugirieron alternativas intermedias también. El alcance de la instrucción se limita a recordar que la generación, utilización o difusión de contenidos sintéticos que impliquen la suplantación de una persona identificable mediante el uso de datos personales puede constituir una forma de tratamiento ilícito de datos, además de eventualmente configurar responsabilidades en otros ámbitos del ordenamiento jurídico. Sin embargo, se opta por su eliminación.</p>
19	19/12/2025	ECUJA	<p>Enfatizar en transparencia y calidad de la información: Si bien la autorización es relevante, resulta fundamental reforzar el principio de transparencia. Los ciudadanos merecen información veraz y clara. Por ello, se sugiere incluir instrucciones que obliguen a informar la finalidad del tratamiento, la identidad del remitente, el origen de la campaña y el uso de herramientas automatizadas, entre otros aspectos. Este enfoque fortalecería el control social y la rendición de cuentas.</p>	ACEPTADA	<p>En efecto, la instrucción 7 desarrolla de manera expresa los principios de transparencia y libertad, al exigir que los sujetos vigilados garanticen que el Titular pueda comprender, de forma suficiente, cómo se estructuró el uso de sus datos personales para la entrega de mensajes políticos. Así mismo, establece la obligación de informar de manera clara, en lenguaje sencillo, con información de fácil lectura y sin barreras técnicas, aspectos tales como la finalidad del tratamiento, la fuente de los datos, los criterios de segmentación, las categorías de datos personales utilizadas, la lógica general del tratamiento, el tipo de segmentación realizada y el uso de herramientas automatizadas o sistemas de inteligencia artificial, a través de los Avisos de Privacidad o Políticas de Tratamiento de Datos.</p>
20	19/12/2025	ECUJA	<p>En la instrucción 4, aclarar el tratamiento de datos públicos en el marco de las operaciones sobre web scraping.</p> <p>En la instrucción 6 se establece la prohibición de elaborar perfiles que revelen la ideología política del Titular. No obstante, surge la inquietud sobre si dicho tratamiento podría considerarse permitido cuando se cuenta con la autorización expresa del Titular, cumpliendo con los requisitos aplicables al manejo de datos sensibles.</p>	ACEPTADA	<p>En relación con la instrucción 4, se ajusta el texto con el fin de aclarar expresamente el tratamiento de datos de naturaleza pública, incluidos aquellos obtenidos mediante herramientas automatizadas de extracción de información (web scraping), precisando que dicho tratamiento no requiere autorización del Titular cuando se realice en los términos previstos por la Ley 1581 de 2012 y en estricto cumplimiento de los principios y obligaciones del régimen de protección de datos personales.</p>
21	15/12/2025	DEJUSTICIA	<p>1. Superárganos que, en la medida en que en la Circular se habla del uso de sistemas de IA en marketing digital político, dejen una instrucción expresa de realizar un estudio de impacto previo para la privacidad e incorporar la privacidad por diseño como ya lo había reconocido la SIC en los lineamientos sobre el tratamiento de datos personales en sistemas de inteligencia artificial.</p>	ACEPTADA	<p>Se acepta la observación y se incorpora en la instrucción no. 7</p>
22	15/12/2025	DEJUSTICIA	<p>Superárganos que la SIC explore la posibilidad de dejar explícito en una instrucción que los sujetos vigilados deberían adoptar los mecanismos necesarios para permitir a las personas revocar el consentimiento del uso de sus datos personales de manera independiente, establecer canales oficiales para ejercer esos derechos. Consideramos esencial que estos canales sean puestos en conocimiento de la ciudadanía en cada una de las comunicaciones o publicidad que ellos reciban por parte de entidades, de suerte que se pueda renovar o modificar el consentimiento, una vez iniciado el tratamiento de los datos, pues con frecuencia es difícil para la ciudadanía saber cómo y dónde se pueden ejercer sus derechos.</p>	ACEPTADA	<p>Se acepta la observación y se incorpora como una nueva instrucción</p>
23	15/12/2025	DEJUSTICIA	<p>Comentarios de los sujetos vigilados. El documento no indica cuáles son los sujetos vigilados. Solo en la instrucción decima se menciona a partidos y movimientos políticos, lo que puede generar interpretaciones restrictivas. Sería conveniente incluir desde el inicio una definición ilustrativa (no exhaustiva) de los sujetos a los que aplica la circular: candidatos, partidos y movimientos políticos, organizaciones de veeduría política, comités promotores, entre otros. Esto daría mayor certeza y evitaría interpretaciones que excluyan actores relevantes.</p>	ACEPTADA	<p>Se acoge el comentario y se fortalece la definición de los sujetos a quienes está dirigida la circular en la instrucción 1, con el fin de brindar mayor claridad y seguridad jurídica sobre su ámbito de aplicación.</p>
24	15/12/2025	DEJUSTICIA	<p>Delegatura de Datos de la SIC y quienes son los sujetos obligados a cumplir con las disposiciones de la Circular, incluidos los partidos políticos, movimientos y grupos ciudadanos, agencias de marketing, plataformas, entre otros, pero también las personas naturales que tengan bases de datos y no hagan uso exclusivo personal o doméstico de ellos, sino político.</p> <p>Superárganos que en la instrucción No. 6 cuando se habla de la prohibición de tratamiento de datos personales sensibles se mencione que, aunque esa sea la regla general, hay algunas excepciones a esta prohibición. En efecto, hay una autorización cualificada ante la cual esa prohibición cede y consideramos que es esencial incluir en las instrucciones los requisitos específicos que requeriría esa autorización (artículo 6 del Decreto 1377 de 2013).</p>	ACEPTADA	<p>Se ajusta la instrucción para precisar que el tratamiento de datos personales sensibles es jurídicamente admisible cuando exista autorización previa, expresa e informada del Titular, o cuando concurre alguna de las excepciones previstas en la ley.</p>

			<p>Sugerimos que en lo antecedentes de la circular se incluya como ejemplo de lo que no se puede hacer el caso de Cambridge Analítica, en el cual hubo inferencia de datos sensibles, de suerte que los sujetos vigilados visualicen el objetivo de la circular.</p>		
25	15/12/2025	DEJUSTICIA		ACEPTADA	<p>Se ajusta ligeramente la redacción de los considerandos, en donde se hacía referencia a la práctica del caso de Cambridge analítica, sin mención de manera expresa dicho caso, al indicar: "El uso inadecuado de datos personales para ofrecer publicidad política dirigida a cierto grupo de personas, especialmente cuando involucra datos sensibles o inferencias sobre estos, puede fragmentar el debate público y distorsionar la deliberación democrática. Este tipo de prácticas favorece la creación de burbujas informativas y percepciones sesgadas del electorado, derivadas de un acortamiento selectivo y diferenciado hacia determinados grupos o individuos, mediante niveles desiguales de difusión de información. En numerosos casos, estos mensajes se distribuyen a través de redes sociales o mediante publicidad política diseñada para ser engañosa o para explotar vulnerabilidades identificadas a partir del tratamiento de datos personales, lo cual constituye un riesgo grave para el sistema democrático. Experiencias documentadas en otros países evidencian que tales prácticas pueden conducir a formas de manipulación del electorado, al influir de manera indebida en los mecanismos esenciales para el funcionamiento de una sociedad democrática"</p>
26	18/12/2025	PRIVACY INTERNATIONAL ORG	<p>Suggested edits #2 #4 - It would be good to define in both of these paragraphs, or elsewhere in the instrucciones in a separate paragraph, what parameters constitute "autorización libre, previa, expresa e informada" in this context (for example see GDPR article 7)(i) and (recital 32) https://gdpr-info.eu/art-7-gdpr/) (i) and (recital 32) https://gdpr-info.eu/recitalno-32/) #4 - please consider adding the word "previa" before "expresa" in the first sentence. Please consider adding the word "libre" in the last sentence before "previa".</p>	ACEPTADA PARCIALMENTE	<p>En relación con la sugerencia de tener los parámetros que constituyen una "autorización libre, previa, expresa e informada", se precisa que dichos conceptos ya han sido desarrollados de manera reiterada por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de su doctrina administrativa, en el marco de la interpretación y aplicación de la Ley 1581 de 2012 y su normativa reglamentaria.</p> <p>No obstante, se acoge la observación en cuanto a los ajustes de redacción propuestos. En ese sentido, se realizan las modificaciones correspondientes para incorporar expresamente el carácter "previo" de la autorización y armonizar la redacción con los estándares legales vigentes, asegurando claridad y coherencia terminológica en el texto de la circular.</p>
27	18/12/2025	PRIVACY INTERNATIONAL ORG	<p>#6 Can all of the sensitive categories of personal data in artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 be named here?</p>	NO ACEPTADA	<p>Si bien el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 establece las condiciones para el tratamiento de datos personales sensibles, la enumeración de las categorías de datos sensibles se encuentra definida en el artículo 5 de la misma ley. En consecuencia, no resulta necesario ni conveniente reproducir nuevamente dicha enumeración en la presente circular, en la medida en que ello podría generar reiteraciones normativas innecesarias y eventuales incongruencias interpretativas.</p>
28	18/12/2025	PRIVACY INTERNATIONAL ORG	<p>#7 Please consider adding in this paragraph that this responsibility should extend to the provision of clear, visible, comprehensible information to those targeted by the advertisement(s) explaining (a) why they are receiving a particular message / advertisement and (b) who is responsible for the advertisement and (c) how they can exercise their rights to protect their data to prevent themselves from being targeted.</p>	ACEPTADA	<p>La observación se acoge, en el entendido de que los aspectos señalados ya se encuentran previstos y desarrollados en la instrucción 7 del proyecto de circular.</p> <p>En efecto, dicha instrucción exige que los sujetos vigilados garanticen que el Titular reciba información clara, visible y comprensible sobre el uso de sus datos personales en la publicidad política dirigida, permitiendo conocer por qué recibe determinados mensajes, quién es responsable del tratamiento y los mecanismos para ejercer sus derechos, en cumplimiento de los principios de libertad y transparencia establecidos en la Ley 1581 de 2012.</p> <p>En consecuencia, no se considera necesario realizar ajustes adicionales, por cuanto la circular ya incorpora las obligaciones de información y transparencia a las que se refiere la observación.</p>
29	18/12/2025	PRIVACY INTERNATIONAL ORG	<p>#8 Consider adding here an obligation to include in the register the categories of personal data used (as well as the criteria used for targeting as is already included). Consider extending this obligation so that the targeting criteria must be published on the website of the Responsible, to allow public scrutiny (not only available to the Superintendencia).</p>	NO ACEPTADA	<p>La observación no se acoge, por cuanto la imposición de obligaciones de publicación pública de criterios de segmentación y la ampliación del registro para fines de escrutinio general exceden la competencia legal de la Superintendencia de Industria y Comercio. La SIC puede requerir información para efectos de inspección, vigilancia y control, pero no está facultada para imponer deberes de divulgación pública no previstos por el legislador.</p>
30	18/12/2025	PRIVACY INTERNATIONAL ORG	<p>Suggested additions: Consider adding in #5 of the instrucciones a limitation on data sharing, along the lines of "No personal data shall be shared by political parties and other political campaign actors to other organisations, without having legal basis or obtaining the express consent of the Titular." Based on 4.1.15. of the Council of Europe guidelines, https://rm.coe.int/guidelines-on-data-protection-and-election-campaigns-en/1680a5ae72 To consider incorporate in #5 a prohibition on targeted advertising based on pervasive tracking; the processing of data regarding an individual's behaviour across different platforms, websites and services, and/or time. To consider revising the instrucciones (in #7) to prohibit entirely the use of personal data for micro-targeting for political purposes, whereby messages are developed and/or the intended targets of political advertising selected based on the real or perceived characteristics, interests or preferences of individuals. See EDPs opinion para 34: https://www.edps.europa.eu/system/files/2022-01/edps_opinion_political_ads_en.pdf Resolución 1.19 of the Council of Europe's guidelines, https://rm.coe.int/guidelines-on-data-protection-and-election-campaigns-en/1680a5ae72 We recommend adding an obligation in the instrucciones on the conduct of due diligence. Specifically, endowment on subjects vigilados that require treatment of data personales con fines políticos o electorales should carry out prior and systematic data protection impact assessments and human rights impact assessments before collecting and processing personal data so as to identify and mitigate against risks, and should make these publish these assessments so they are accessible to Superintendencia. As part of this obligation they should also carry out data protection audits and publish these so they are accessible to the Superintendencia</p>	ACEPTADA	<p>La observación se valora positivamente y se entiende atendida, en la medida en que las preocupaciones planteadas ya han sido incorporadas de manera transversal a lo largo del proyecto de circular.</p> <p>En efecto, el proyecto desarrolla de forma integral los principios de legalidad, finalidad, libertad, transparencia, proporcionalidad y responsabilidad, e incluye obligaciones relativas a la autorización para el tratamiento, la limitación en la comunicación de datos a terceros, la gestión de riesgos asociados a la segmentación y al uso intensivo de datos personales, así como medidas orientadas a garantizar la rendición de cuentas frente a la Autoridad.</p> <p>Así mismo, las consideraciones relacionadas con prácticas de publicidad política dirigida, uso de tecnologías emergentes y protección de riesgos han sido abordadas en las distintas instrucciones, dentro del marco del régimen vigente de protección de datos personales y sin exceder las competencias legales de la Superintendencia de Industria y Comercio.</p> <p>En este sentido, no se estima necesario incorporar disposiciones adicionales, por cuanto los elementos señalados ya se encuentran reflejados en el texto del proyecto, garantizando un equilibrio adecuado entre la protección de los derechos de los Titulares y el desarrollo legítimo de la actividad política y electoral.</p>
31	18/12/2025	PRIVACY INTERNATIONAL ORG	<p>We recommend adding a provision prohibiting the use of artificial intelligence (AI) technologies in election campaigns which fail to comply with applicable human rights law, including for example those AI techniques which manipulate individuals' opinions and thoughts such as subliminal techniques, exploiting vulnerabilities distort the behaviour of a person, and categorisation of individuals to deduce or infer their political opinions or other sensitive information. Based on EU AI Act article 5: https://artificialintelligence.eu/article/5/ As an alternative, we recommend including an obligation on the prior conduct of human rights and data protection due diligence on the use of AI systems in electoral campaigning and the publication of this for the Superintendencia's sight. Consider adding in the instrucciones a transparency/due diligence obligation when using third parties, such as data brokers, along the lines of "Before using data from data brokers, los partidos y movimientos políticos should carry out full due diligence to ensure the data were obtained lawfully. They should be transparent as to the third parties they contract with as part of their campaigns both to obtain data and to further process data, including profiling and targeting, such as data brokers and political advertising companies." Based on 4.1.13 and 4.4.2 of the Council of Europe guidelines, https://rm.coe.int/guidelines-on-data-protection-and-election-campaigns-en/1680a5ae72</p>	NO ACEPTADA	<p>La observación se valora, pero no se acoge. La presente circular se expone en el marco de las competencias atribuidas a la Superintendencia de Industria y Comercio como Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, y su alcance se limita a impartir instrucciones para la correcta aplicación del régimen de protección de datos personales previsto en la Ley 1581 de 2012.</p> <p>En ese sentido, la Superintendencia no cuenta con competencia para establecer prohibiciones generales sobre el uso de tecnologías de inteligencia artificial en campañas políticas o electorales, ni para incorporar de manera directa estándares regulatorios de derecho comparado que no forman parte del ordenamiento jurídico colombiano. Las eventuales restricciones relacionadas con prácticas manipulativas, técnicas subliminales o afectaciones amplias a derechos humanos exceden el ámbito propio de esta circular y corresponden a desarrollos normativos de rango legal o a la actuación de otras autoridades competentes.</p> <p>No obstante, las preocupaciones planteadas ya se encuentran atendidas en el proyecto de circular, a través de las disposiciones relativas al tratamiento de datos personales sensibles, el perfilamiento, el deber de información y los principios de legalidad, finalidad, proporcionalidad y transparencia, aplicables con independencia de la tecnología utilizada.</p>
32	19/12/2025	Consejo Nacional Electoral	<p>Naturaliza y alcance de la competencia de la SIC. La SIC ejerce funciones de policía administrativa técnica, circunscritas al cumplimiento del régimen de protección de datos personales. Sus competencias, previstas en el artículo 21 de la Ley 1581 de 2012, se limitan a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velar por el cumplimiento de la legislación de protección de datos. • Impartir instrucciones para la adecuación técnica de los tratamientos de datos. • Investigar y sancionar infracciones exclusivamente relacionadas con el habeeas data. <p>En ningún caso la ley le atribuye competencias para regular el ejercicio de derechos políticos, intervenir en campañas electorales o disciplinar a los actores políticos. Es una competencia propia del Consejo Nacional Electoral quien regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden. Reserva constitucional en materia política y electoral</p> <p>La actividad política y electoral se encuentra sujeta a una reserva constitucional reforzada, en virtud de la cual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La regulación del régimen de partidos corresponde al legislador estatutario. • La inspección, vigilancia y control de la actividad electoral corresponde de manera exclusiva al Consejo Nacional Electoral. <p>Cualquier intervención administrativa distinta constituye una exdramatización de funciones y vulnera el principio de separación funcional de competencias.</p> <p>Autonomía constitucional de los partidos políticos</p> <p>Los partidos políticos son sujetos constitucionales de especial protección, cuya autonomía ideológica, organizativa y funcional es condición esencial del pluralismo democrático. Cualquier medida administrativa que condicione el contenido del mensaje político, la forma de relacionamiento con electores o militantes, la estrategia de campaña, sin habilitación constitucional expresa, resulta contraria a los artículos 107 y 108 de la Constitución.</p> <p>• Límite de la potestad sancionatoria de la SIC</p> <p>La potestad sancionatoria administrativa se rige por el principio de legalidad estricta. En consecuencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La SIC solo puede sancionar conductas expresamente tipificadas en el régimen de protección de datos. No puede imponer sanciones que, en la práctica, restrinjan la actividad política, pues ello equivaldría a una sanción política encubierta. • Cualquier sanción que incida materialmente en el ejercicio de la actividad electoral carecería de competencia, causa y finalidad constitucional legítima. 	NO ACEPTADA	<p>En consecuencia, no resulta procedente incorporar una instrucción adicional en los términos "La Circular no regula la actividad electoral ni define la forma en que deben desarrollarse las campañas políticas, materias que corresponden a las autoridades electorales en el marco de sus competencias constitucionales y legales. El objeto de las instrucciones se circunscribe de manera exclusiva al tratamiento de datos personales cuando este se realiza con fines políticos o electorales, ámbito respecto del cual la Superintendencia ejerce competencias expresas como Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.</p> <p>En ese sentido, las medidas contenidas en la Circular no introducen reglas sustantivas sobre propaganda, publicidad electoral o estrategias de campaña, sino que reiteran y desarrollan la aplicación del régimen general de protección de datos personales a un contexto específico de tratamiento que presenta riesgos reforzados para los derechos fundamentales de los titulares, en particular cuando involucra datos sensibles, perfilamiento, segmentación o inferencias.</p> <p>Debe recordarse que el artículo 21 de la Ley 1581 de 2012 faculta expresamente a esta Superintendencia para velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales e impartir instrucciones sobre las medidas y procedimientos necesarios para la adecuación de las operaciones de los Responsables y Encargados del Tratamiento a dicha normativa. La Corte Constitucional ha reconocido de manera reiterada que estas funciones hacen parte de la potestad de policía administrativa y comprenden la emisión de instrucciones generales dirigidas a prevenir riesgos y garantizar la efectividad del derecho fundamental al habeeas data (sentencias C-1011 de 2008 y C-748 de 2011).</p> <p>Adicionalmente, la Corte Constitucional ha advertido que el tratamiento de datos personales en contextos políticos y electorales puede generar impactos significativos sobre otros derechos fundamentales y sobre el funcionamiento de la democracia, especialmente cuando se utilizan técnicas de segmentación, microsegmentación o inferencia a partir de datos sensibles. En ese escenario, resulta no solo legítimo sino necesario que la autoridad de protección de datos precise los estándares mínimos de cumplimiento del régimen de habeeas data, sin que ello implique una intromisión en la regulación electoral.</p> <p>En consecuencia, la Superintendencia considera que no existe una usurpación de funciones, en la medida en que la Circular se limita a impartir instrucciones dentro del ámbito material de su competencia.</p>
33	19/12/2025	ALAI	<p>Sobre las Instrucciones 2 y 4</p> <p>Solicitamos respetuosamente que estas instrucciones precisen que la autorización para el tratamiento de datos personales también se considera válida cuando se otorgue mediante conductas inequívocas del Titular, sin perjuicio de mantener la exigencia de autorización expresa en los casos de tratamiento de datos sensibles, conforme a lo previsto en el marco normativo vigente de protección de datos personales.</p> <p>Las instrucciones, tal como se presentan en el proyecto, desconocen que la autorización por parte del Titular para el tratamiento de sus datos personales, además de poder ser expresa, conforme al artículo 7 del Decreto 1377 de 2013, también puede otorgarse mediante conductas inequívocas del Titular que permitan concluir de forma razonable que otorgó la autorización. Cualquier interpretación distinta implicaría introducir, por vía administrativa, una carga adicional no contemplada por el legislador estatutario y generaría un estándar más estricto del que está establecido en el régimen vigente.</p>	ACEPTADA PARCIALMENTE	<p>Se acoge parcialmente la observación. No obstante, la doctrina reiterada y consistente de la Superintendencia de Industria y Comercio ha interpretado que el tratamiento de datos personales sensibles requiere autorización expresa, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012. En consecuencia, el tratamiento de datos personales sensibles, que por regla general se encuentra prohibido y cuya prohibición solo puede levantarse en los casos expresamente previstos por la ley, exige como mínimo la autorización previa y expresa del Titular, sin que sea jurídicamente admisible su obtención mediante conductas inequívocas.</p> <p>Respecto del uso del término "libre", se acoge la observación y se elimina dicha expresión, sin que ello implique la alteración de los requisitos sustanciales de validez de la autorización establecidos en el régimen vigente de protección de datos personales.</p>

34	19/12/2025	ALAI	<p>Sobre la instrucción 3:</p> <p>Solicitamos respetuosamente la eliminación del término "de manera visible" utilizado en esta instrucción. Ni la Ley 1581 de 2012 ni el Decreto 1377 de 2013 exigen que la política de Tratamiento de datos personales, los avisos de privacidad o los mecanismos de autorización se exhiban "de manera visible" en todos los canales de recolección. El Decreto 1377 se limita a establecer que: (i) las políticas de tratamiento deben constar en medio físico o electrónico, en lenguaje claro y sencillo y ser puestas en conocimiento de los Titulares; (ii) cuando no sea posible poner a disposición las políticas, el Responsable debe informar mediante aviso de privacidad sobre su existencia y la forma de acceder a ellas, a más tardar al momento de la recolección; y (iii) el aviso y las políticas pueden difundirse por diversos medios (documentos, formatos electrónicos, medios verbales o cualquier otra tecnología), siempre que se garantice el deber de informar, y que los procedimientos para el ejercicio de derechos "deben darse a conocer o ser fácilmente accesibles" para los Titulares. En ningún caso la norma eleva la "visibilidad" de dichos instrumentos a un estándar adicional o autónomo de cumplimiento.</p> <p>La introducción del calificativo "de manera visible" crea un requisito nuevo, sin del cual ningún nivel de parámetros objetivos sobre su alcance, que pueda interpretarse de forma ambigua, por ejemplo, en cuanto al tamaño, ubicación o forma de presentación en interfaces físicas o digitales. Nuevamente, esto genera inseguridad jurídica para Responsables y Encargados al no existir un criterio normativo claro sobre cuándo se considera satisfecho. Desde esta perspectiva, resulta alineado al marco vigente mantener los estándares ya previstos por la Ley y el Decreto, en cuanto al deber de informar, ser puestas en conocimiento, y ser fácilmente accesibles, sin adicionar exigencias no contempladas.</p>	ACEPTADA PARCIALMENTE	<p>Se acepta parcialmente la observación.</p> <p>El uso del término "de manera visible" no pretende introducir un requisito autónomo ni adicional a los previstos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. sino reforzar el cumplimiento efectivo del deber de informar, en armonía con los estándares legales vigentes. En particular, debe interpretarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1581 de 2012, según el cual la información suministrada al Titular deberá ser de fácil lectura, no presentar barreras técnicas que impidan su acceso y corresponder en un todo a aquella que repose en la base de datos.</p> <p>En ese sentido, la referencia a la "visibilidad" se entiende como una concreción funcional de los criterios de accesibilidad, claridad y disponibilidad efectiva de la información, ya previstos en la normativa vigente, y no como la imposición de parámetros formales adicionales relacionados con tamaño, ubicación o diseño de los mecanismos de información.</p>
35	19/12/2025	ALAI	<p>C. Sobre la Instrucción 4:</p> <p>Se solicita la remoción de esta propuesta. En primer lugar, se solicita respetuosamente que no se haga referencia explícita a servicios particulares ya que no es una técnica regulatoria apropiada. Por otro lado, resulta desproporcionada la restricción considerando la amplitud que puede tener el concepto de "fin no políticos o electorales", el cual pese a no estar del todo, es en cualquier supuesto más amplio que la actividad publicitaria.</p> <p>Invitar a la participación cívica, a la discusión política, a la opinión, a la consulta no debería tener ninguna restricción adicional a la de cualquier otro procesamiento de datos por cualquier otro motivo, como actividades que realizan las ONG u organizaciones de todo tipo. Esta restricción altera severamente el curso normal en cualquier sociedad respecto del debate sobre aspectos cruciales de desarrollo político y gubernamental, y debería ser suficientemente clara para que el titular del dato pueda ejercer sus derechos como tal.</p> <p>Por otro lado, incorpora distintos supuestos que requieren, cada uno de ellos, un análisis sobre el tipo de procesamiento que involucran. En particular, la referencia a la recolección automatizada de datos online públicos debe ser objeto de un análisis más pormenorizado que explique el racional de la restricción. Lo mismo con "o contactaría utilizando bases de datos adquiridas o suministradas por terceros", lo cual altera sustancialmente la regulación de bases legales de tratamiento e implementa una restricción y responsabilidad que no surge del texto de la ley.</p>	NO ACEPTADA	<p>El borrador de la circular no regula la expresión política, la opinión, la deliberación pública ni la interacción espontánea entre ciudadanos. Regula el uso organizado, sistemático o masivo de datos personales, lo cual constituye una actividad jurídicamente distinta y sometida al cumplimiento de los principios y deberes del régimen de protección de datos personales, en particular el principio de libertad.</p> <p>En cuanto a la referencia a servicios de mensajería instantánea o a prácticas específicas como el uso de bases de datos de terceros o la recolección automatizada de información, estas menciones tienen un carácter ilustrativo, orientado a brindar claridad operativa a los sujetos vigilados, y no implican la regulación de plataformas ni de tecnologías específicas.</p> <p>Tampoco resulta acertado afirmar que la instrucción impone restricciones adicionales a organizaciones sociales, ONG u otros actores distintos de partidos o campañas. Todo responsable o encargado del tratamiento de datos personales, independientemente de su naturaleza u objeto social, está sujeto a las mismas obligaciones legales cuando trata datos personales, sin que la finalidad política, cívica o social exoneré del cumplimiento del deber de contar con una base legítima para el tratamiento.</p> <p>Respecto del uso de datos obtenidos a través de terceros o mediante herramientas automatizadas de extracción de información, la instrucción se limita a reiterar lo existente en el régimen vigente: el responsable del tratamiento debe verificar la existencia y validez de la autorización, salvo en los casos expresamente exceptuados por la ley, que ocurre con los datos de naturaleza pública, cuyo uso también se encuentra sujeto al cumplimiento de los principios del régimen de protección de datos personales.</p>
36	19/12/2025	ALAI	<p>D. Sobre la instrucción 6:</p> <p>Solicitamos respetuosamente que esta instrucción sea eliminada, por cuanto desconoce tanto la definición legal del concepto de datos sensibles como la existencia de excepciones a la prohibición de su tratamiento expresamente previstas por la ley.</p> <p>Por un lado, en aplicación del Artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, el tratamiento de datos sensibles se encuentra permitido bajo determinados supuestos, entre ellos, que el Titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento. Por lo tanto, siempre que medie debida autorización por parte del Titular para el fin que corresponda, se podrá elaborar perfiles relacionados con su ideología política, así como perfiles basados en inferencias que permitan revelar dicha condición, incluidos otros datos sensibles del mismo por la ley.</p> <p>Por otro lado, debe destacarse que de ninguna manera la ley impide inferencias sobre el interés de una persona de participar en discusiones o actividades políticas o electorales. Es absolutamente distinto inferir que alguien se interesa por la dinámica política o electoral de un país que inferir, en todo caso, la orientación política. El interés en participar de la discusión de una plataforma electoral, o sobre por ejemplo la conducta de un candidato, excede ampliamente la orientación política.</p> <p>En consecuencia, esta instrucción implicaría restringir de manera legítima actividades que la propia Ley 1581 de 2012 permite a los Responsables y Encargados del tratamiento, siempre que cuenten con autorización explícita y cumplan las demás obligaciones del régimen de protección de datos personales. Ello, además, desborda la competencia de la SIC, cuya función se limita a impartir instrucciones para la adecuada aplicación de la ley, más no a prohibir o limitar usos que el legislador ha previsto como jurídicamente admisibles bajo condiciones específicas.</p> <p>Así mismo, precisamos que la Ley 1581 de 2012 no reconoce la categoría de "datos sensibles inferidos, deducidos o predichos". El artículo 5 de la Ley del 1581 de 2012 de manera delimitada que debe entenderse por dato sensible, de forma que su alcance no puede ampliarse por vía de circular para incluir hipótesis no contempladas. Al afirmar que la misma prohibición se aplica a datos que "se infieren, deducen o predicen a partir de datos que, de manera aislada, no son sensibles", la instrucción introduce una categoría nueva que desborda la definición legal y termina modificando el contenido material del concepto de dato sensible, en contravía de la reserva de ley estatutaria en materia de derechos fundamentales y de las competencias estrictamente reguladas de la SIC.</p> <p>En todo caso, no existe una prohibición legal frente a la elaboración de perfiles, segmentaciones o inferencias como formas de Tratamiento de datos que de manera aislada no son sensibles, como, por ejemplo, los datos de naturaleza pública. La norma se limita a someter todo Tratamiento de datos personales al cumplimiento de los principios de fiabilidad, libertad, transparencia, acceso y circulación restringida, entre otros, y a exigir autorización previa e informada del Titular (salvo en los casos en que expresamente la exceptúa). Ni la Ley 1581 ni el Decreto 1377 introducen una prohibición específica respecto de perfiles los construidos a partir de datos sensibles, siempre principio de la ley, más no a prohibir o limitar usos que el legislador ha previsto como jurídicamente admisibles bajo condiciones específicas.</p> <p>Esta precisión no introduce una categoría nueva de datos sensibles, ni amplía la definición contenida en el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012. Por el contrario, responde a una aplicación funcional del concepto de tratamiento de datos personales, conforme a la cual el análisis debe recaer sobre el resultado y no los efectos del tratamiento, y no exclusivamente sobre la naturaleza formal de los datos de entrada. En consecuencia, cuando el resultado del tratamiento permite identificar o inferir ideología política u otros atributos sensibles, dicho resultado queda sujeto a las reglas propias de esta categoría.</p> <p>Así mismo, la instrucción no desconoce la licitud general del perfilamiento ni de la segmentación basados en datos personales no sensibles, incluidos los datos de naturaleza pública. Estas prácticas continúan siendo jurídicamente admisibles, siempre que se realicen en cumplimiento de los principios y deberes establecidos en la Ley 1581 de 2012 y su normativa reglamentaria, y cuenten con la base de legitimación correspondiente.</p>	NO ACEPTADA	<p>No se acepta la observación. Conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, el tratamiento de datos sensibles se encuentra, como regla general, prohibido, salvo en los eventos expresamente previstos por la ley, entre ellos, cuando el Titular ha otorgado autorización previa, expresa e informada, o cuando resulte aplicable alguna de las demás excepciones legales. En ese sentido, la instrucción no pretende establecer una prohibición absoluta frente al tratamiento de datos sensibles ni frente a la elaboración de perfiles relacionados con ideología u opiniones políticas, siempre que dicho tratamiento se encuentre debidamente legitimado en los términos previstos por la ley.</p> <p>Esta precisión no introduce una categoría nueva de datos sensibles, ni amplía la definición contenida en el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012. Por el contrario, responde a una aplicación funcional del concepto de tratamiento de datos personales, conforme a la cual el análisis debe recaer sobre el resultado y no los efectos del tratamiento, y no exclusivamente sobre la naturaleza formal de los datos de entrada. En consecuencia, cuando el resultado del tratamiento permite identificar o inferir ideología política u otros atributos sensibles, dicho resultado queda sujeto a las reglas propias de esta categoría.</p> <p>Así mismo, la instrucción no desconoce la licitud general del perfilamiento ni de la segmentación basados en datos personales no sensibles, incluidos los datos de naturaleza pública. Estas prácticas continúan siendo jurídicamente admisibles, siempre que se realicen en cumplimiento de los principios y deberes establecidos en la Ley 1581 de 2012 y su normativa reglamentaria, y cuenten con la base de legitimación correspondiente.</p>
37	19/12/2025	ALAI	<p>E. Sobre las instrucciones 7 y 8:</p> <p>Solicitamos respetuosamente la supresión de estas instrucciones. Por un lado, los principios de libertad y transparencia de la Ley 1581 de 2012 se relacionan con la necesidad de consentimiento del Titular para el tratamiento de sus datos o de un mandato legal judicial que revele el consentimiento, y el derecho del Titular a obtener en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan. Consecuentemente, no se deriva razonablemente de estos principios, ni lo establece la Ley 1581 de 2012 ni el Decreto 1377 de 2013, que existiera para los Responsables y/o Encargados de tratar o en la capacidad de garantizar la comprensión del Titular sobre cómo se estructuró el uso de sus datos para la entrega de mensajes políticos, así como tampoco información de alta complejidad como "los criterios aplicados para la segmentación, las categorías de datos personales utilizadas para definir los grupos de segmentación, los tipos de segmentación utilizados, los tipos de datos, el tipo de segmentación realizada, y si en el proceso se emplearon sistemas de inteligencia artificial", ni mucho menos mantener un registro documental de los criterios de segmentación utilizados en cada campaña digital.</p> <p>Por el contrario, el artículo 5 del Decreto 1377 de 2013 y el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012, únicamente exigen que el Responsable del Tratamiento informe de manera clara y expresa los datos personales que serán recolectados, el tratamiento al cual serán sometidos y la finalidad del mismo.</p> <p>Desde una perspectiva práctica, exigir este nivel de detalle sobre la forma en que se estructuran los mensajes políticos, impone una carga operativa y técnica significativamente alta para partidos políticos, campañas, movimientos ciudadanos, organizaciones sociales y demás Responsables y Encargados que realizan actividades de publicidad, marketing o prospección política y electoral. Este tipo de exigencias afectaría de manera injusta cada la planificación y ejecución de campañas, dificultaría la gestión eficiente de bases de datos y podría desalentar el uso responsable de herramientas tecnológicas que facilitan la comunicación con los ciudadanos y la difusión de información programática.</p> <p>Estas medidas podrían entenderse como buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas que pueden ser adoptadas voluntariamente por los Responsables y Encargados que así lo consideren adecuado para sus modelos de gestión de datos y de comunicación política, mas no como un deber jurídico exigible. Imponerlas como obligación general a través de una circular excede el marco legal vigente, introduce cargas adicionales no previstas por las normas de protección de datos y desconoce el impacto que tales requerimientos tendrían en términos de recursos, capacidades técnicas y operación de las actividades legítimas de comunicación política y electoral.</p>	ACEPTADA PARCIALMENTE	<p>La instrucción 7 se mantiene y la instrucción 8 se elimina. Estas instrucciones desarrollan el principio de transparencia y el deber de información previstos en la Ley 1581 de 2012, particularmente en contextos de tratamiento de datos personales con fines políticos y electorales, en los cuales existe un mayor riesgo de afectación a los derechos fundamentales de los Titulares.</p> <p>En efecto, la exigencia de informar de manera clara, comprensible y accesible aspectos generales como los criterios aplicados para la segmentación, las categorías de datos personales utilizadas, la fuente de los datos, el tipo de segmentación realizada, la lógica general del tratamiento y el eventual uso de sistemas de inteligencia artificial, no implica la divulgación de estrategias políticas, modelos algorítmicos ni información técnica compleja. Se trata de información orientada a permitir que el Titular comprenda por qué y para qué se utilizan sus datos y pueda ejercer de manera informada sus derechos, en concordancia con los artículos 11 y 12 de la Ley 1581 de 2012.</p> <p>La documentación a disposición de la SIC responde a una obligación clásica de cualquier régimen de protección de datos: permitir la verificación del cumplimiento normativo por parte de la autoridad competente. La SIC actúa dentro de su mandato legal al exigir medidas de transparencia y trazabilidad en uno de los escenarios de mayor riesgo para los derechos fundamentales, como lo es el uso de datos personales y técnicas de perfilamiento en campañas electorales.</p> <p>No obstante, se acepta la observación en lo relativo a la exigencia de mantener un registro documental específico de los criterios de segmentación utilizados, por cuanto dicha obligación podría interpretarse como una carga adicional no expresamente prevista en el régimen legal vigente de protección de datos personales. En consecuencia, se elimina la referencia al registro documental, sin perjuicio de las demás obligaciones generales de los Responsables y Encargados de demostrar el cumplimiento de la ley cuando ello sea requerido por la autoridad competente, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control.</p>
38	19/12/2025	ALAI	<p>F. Sobre la instrucción 9:</p> <p>Consideramos que la redacción actual: (i) impone obligaciones de resultado que no son compatibles con el principio de responsabilidad demostrada ni con el rol de las plataformas como intermediarios tecnológicos y (ii) se refiere a escenarios que ya son regulados en la regulación vigente tanto en el marco penal como de consumidor.</p> <p>En relación con la obligación incluida en el proyecto de circular para los sujetos vigilados "abstenerse de generar, utilizar, difundir o promover contenidos sintéticos conocidos como deepfakes que involucren datos personales", consideramos que su redacción implica una obligación de resultado que no es proporcional con el régimen de protección de datos establecido en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1377 de 2013.</p> <p>La obligación de resultado que se impone en el proyecto de circular no es coherente con el principio de responsabilidad demostrada establecido en el artículo 26 del Decreto 1377 de 2013. Este artículo exige que los responsables del tratamiento sean capaces de demostrar que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones establecidas en el régimen de protección de datos. Además, las medidas deben ser proporcionales a la naturaleza jurídica del responsable, la naturaleza de los datos, el tratamiento y los riesgos potenciales sobre los derechos del titular. En este sentido, la responsabilidad demostrada se configura como una obligación de medio, orientada a probar la debida diligencia en la prevención, detección y corrección de riesgos. Sin embargo, el proyecto de circular traslada de manera generalizada a todos los sujetos vigilados, con independencia de su rol o capacidad de control, un riesgo desproporcionado y materialmente imposible de garantizar, en particular frente a contenidos generados y difundidos por terceros, lo cual desborda el alcance normativo del principio de responsabilidad demostrada.</p> <p>Bajo esta misma perspectiva, es importante resaltar que la instrucción 9 implica una obligación de resultado para las plataformas tecnológicas por los contenidos generados por terceros con fines políticos o electorales, en especial los relacionados con actividades de publicidad, marketing o prospección política y electoral. Sin embargo, las plataformas actúan como intermediarios de servicios de la sociedad de la información, cuya función es esencialmente tecnológica y neutral, limitada a facilitar la transmisión, alojamiento o difusión de contenidos creados por otros. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que las plataformas: "tienen un rol dual: i) pasivo facilitando el proceso de transmisión y difusión de un contenido más no toman decisiones sobre la difusión, es decir, "dan acceso, alojamiento transmisión e indexación a contenidos, productos y servicios, que se originan en terceros", escenario donde facilitan la libertad de expresión; y ii) activo en la medida que pueden adoptar un modelo de negocios basado en datos, lo que implica que "a partir de la recolección y análisis descriptivo y prescriptivo de los datos de sus usuarios, las compañías como Facebook y Google formulan "modelos de negocios que confluyen en los datos como un recurso clave para extraer valor económico social".</p> <p>(...)</p> <p>De cara a este contexto, la Corte Constitucional ha referido que los intermediarios de Internet no son responsables por el contenido.</p> <p>En consecuencia, respecto a las instrucciones 2 y 4:</p> <p>Solicitamos respetuosamente que se incluya en estas instrucciones que el otorgamiento de autorización para el tratamiento de sus datos personales también se considera válido si se realiza por medio de conductas inequívocas por parte del Titular, y no únicamente por medio de autorización expresa.</p> <p>(Estas instrucciones desconocen que la autorización por parte del Titular para el tratamiento de sus datos personales, además de poder ser expresa, conforme al artículo 7 del Decreto 1377 de 2013, también puede otorgarse mediante conductas inequívocas del Titular que permitan concluir de forma razonable que otorgó la autorización.</p> <p>Es indispensable que el Proyecto de Circular reconozca expresamente la validez de la autorización otorgada mediante conductas inequívocas del Titular, manteniendo la exigencia de autorización explícita para los casos de tratamiento de datos sensibles, tal y como lo prevé el marco normativo de protección de datos personales actual.</p> <p>Cualquier interpretación distinta implicaría introducir, por vía administrativa, una carga adicional no contemplada por el legislador estatutario y generar un estándar más estricto que el establecido en el régimen vigente.</p> <p>Asimismo, solicitamos respetuosamente la eliminación del término "perfil" utilizado en ambas instrucciones para calificar la autorización del Titular. Este calificativo no es "utilizado por la Ley 1581 de 2012 ni por el Decreto 1377 de 2013 como elemento autónomo o adicional de la autorización, por lo que, su introducción supone incorporar una noción no prevista. Además, su alcance resulta indefinido y ambiguo, lo que podría generar inseguridad jurídica tanto para los Responsables y Encargados del Tratamiento, como para los propios Titulares, al no contar con un parámetro normativo claro sobre su significado y forma de cumplimiento.</p>	ACEPTADA	<p>Se elimina la instrucción sobre contenido sintético u otro falso (deepfakes). Se acepta el comentario que sugiere su eliminación, si bien se sugirieron alternativas intermedias también. El alcance de la instrucción se limitaba a recordar que la generación, utilización o difusión de contenidos sintéticos que impliquen la suplantación de una persona identificable mediante el uso de datos personales puede constituir una forma de tratamiento ilícito de datos, además de eventualmente configurar responsabilidades en otros ámbitos del ordenamiento jurídico. Sin embargo, se opta por su eliminación.</p> <p>Se ajusta la instrucción, limitando su alcance a la referencia expresa al delito previsto en el Código Penal aplicable a esta conducta, a fin de evitar interpretaciones extensivas o restrictivas del marco de política.</p>
39	19/12/2025	CCIT	<p>G. Respecto a las instrucciones 2 y 4:</p> <p>Solicitamos respetuosamente que se incluya en estas instrucciones que el otorgamiento de autorización para el tratamiento de sus datos personales también se considera válido si se realiza por medio de conductas inequívocas por parte del Titular, y no únicamente por medio de autorización expresa.</p> <p>(Estas instrucciones desconocen que la autorización por parte del Titular para el tratamiento de sus datos personales, además de poder ser expresa, conforme al artículo 7 del Decreto 1377 de 2013, también puede otorgarse mediante conductas inequívocas del Titular que permitan concluir de forma razonable que otorgó la autorización.</p> <p>Es indispensable que el Proyecto de Circular reconozca expresamente la validez de la autorización otorgada mediante conductas inequívocas del Titular, manteniendo la exigencia de autorización explícita para los casos de tratamiento de datos sensibles, tal y como lo prevé el marco normativo de protección de datos personales actual.</p> <p>Cualquier interpretación distinta implicaría introducir, por vía administrativa, una carga adicional no contemplada por el legislador estatutario y generar un estándar más estricto que el establecido en el régimen vigente.</p> <p>Asimismo, solicitamos respetuosamente la eliminación del término "perfil" utilizado en ambas instrucciones para calificar la autorización del Titular. Este calificativo no es "utilizado por la Ley 1581 de 2012 ni por el Decreto 1377 de 2013 como elemento autónomo o adicional de la autorización, por lo que, su introducción supone incorporar una noción no prevista. Además, su alcance resulta indefinido y ambiguo, lo que podría generar inseguridad jurídica tanto para los Responsables y Encargados del Tratamiento, como para los propios Titulares, al no contar con un parámetro normativo claro sobre su significado y forma de cumplimiento.</p>	ACEPTADA PARCIALMENTE	<p>Se ajusta la instrucción, limitando su alcance a la referencia expresa al delito previsto en el Código Penal aplicable a esta conducta, a fin de evitar interpretaciones extensivas o restrictivas del marco de política.</p>

40	19/12/2025	CCIT	<p>2.2. Respecto a la Instrucción 3 Solicitamos respetuosamente la eliminación del término "de manera visible" utilizado en esta instrucción.</p> <p>Al respecto, ni la Ley 1581 de 2012 ni el Decreto 1377 de 2013 exigen que la política de Tratamiento de datos personales, los avisos de privacidad o los mecanismos de autorización se exhiban "de manera visible" en todos los canales de recolección.</p> <p>El Decreto 1377 de 2013 se limita a establecer que: (i) las políticas de tratamiento deben constar en medio físico o electrónico, en lenguaje claro y sencillo y ser puestas en conocimiento de los Titulares; (ii) cuando no sea posible poner a disposición las políticas al Responsable debe informar mediante aviso de privacidad sobre su existencia y la forma de acceder a ellas, a más tardar al momento de la recolección; y (iii) el aviso y las políticas pueden difundirse por diversos medios (documentos, formatos electrónicos, medios verbales o cualquier otra tecnología), siempre que se garantice el deber de informar, y que los procedimientos para el ejercicio de derechos "deben darse a conocer o ser fácilmente accesibles" para los Titulares. En ningún caso la norma eleva la "visibilidad" de dichos instrumentos a un estándar adicional o autónomo de cumplimiento.</p> <p>La introducción del calificativo "de manera visible" crea un requisito nuevo, sin definición legal ni parámetros objetivos sobre su alcance, que puede interpretarse de forma ambigua, por ejemplo, en cuanto al tamaño, ubicación o forma de presentación en interfaces físicas o digitales. Nuevamente, esto genera inseguridad jurídica para Responsables y Encargados al no existir un criterio normativo claro sobre cuándo se considera satisfecho. Desde esta perspectiva, resulta alineado al marco vigente mantener los estándares ya previstos por la Ley y el Decreto, en cuanto al deber de informar, ser puestas en conocimiento, y ser fácilmente accesibles, sin adicionar exigencias no contempladas.</p>	ACEPTADA PARCIALMENTE	<p>Se acoge parcialmente la observación.</p> <p>El uso del término "de manera visible" no pretende introducir un requisito autónomo ni adicional a los previstos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, sino reforzar el cumplimiento efectivo del deber de informar, en armonía con los estándares legales vigentes. En particular, debe interpretarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1581 de 2012, según el cual la información suministrada al Titular deberá ser de fácil lectura, no presentar barreras técnicas que impidan su acceso y corresponder en un todo a aquella que repose en la base de datos.</p> <p>En ese sentido, la referencia a la "visibilidad" se entiende como una concreción funcional de los criterios de accesibilidad, claridad y disponibilidad efectiva de la información, ya previstos en la normativa vigente, y no como la imposición de parámetros formales adicionales relacionados con tamaño, ubicación o diseño de los mecanismos de información.</p>
41	19/12/2025	CCIT	<p>2.3. Respecto a la Instrucción 6 Solicitamos respetuosamente que esta instrucción sea eliminada, por cuanto desconoce tanto la definición legal del concepto de datos sensibles como la existencia de excepciones a la prohibición de su tratamiento expresamente previstas por la Ley.</p> <p>Por un lado, en aplicación del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, el tratamiento de datos sensibles se encuentra permitido bajo determinados supuestos, entre ellos, que el Titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento. Por lo tanto, siempre que medie debida autorización por parte del Titular para el fin que corresponda, se podrá elaborar perfiles relacionados con su ideología política, así como perfiles basados en inferencias que permitan revelar dicha condición, incluidos otros datos sensibles definidos por la ley.</p> <p>En consecuencia, esta instrucción implicaría restringir de manera ilegítima actividades que la propia Ley 1581 de 2012 permite a los Responsables y Encargados del tratamiento, siempre que cuenten con autorización explícita y cumplan las demás obligaciones del régimen de protección de datos personales. Ello, además, desborda la competencia de la SIC, cuya función se limita a impartir instrucciones para la adecuada aplicación de la ley, mas no a prohibir o limitar usos que el legislador ha previsto como jurídicamente admisibles bajo condiciones específicas.</p> <p>Así mismo, precisamos que la Ley 1581 de 2012 no reconoce la categoría de "datos sensibles inferidos, deducidos o predichos". El artículo 5 de la ley define de manera delimitada qué debe entenderse por dato sensible, de forma que su alcance no puede ampliarse por vía de circular para incluir hipótesis no contempladas. Al afirmar que la misma prohibición se aplica a datos que "se inferen, deducen o predicen a partir de datos que, de manera aislada, no son sensibles", la instrucción introduce una categoría nueva que desborda la definición legal y termina modificando el contenido material del concepto de dato sensible, en contravía de la reserva de ley estatutaria en materia de derechos fundamentales y de las competencias estrictamente reguladas de la SIC.</p> <p>En todo caso, no existe una prohibición legal frente a la elaboración de perfiles, segmentaciones o inferencias como formas de Tratamiento de datos que de manera aislada no son sensibles, como, por ejemplo, los datos de naturaleza política. La norma se limita a someter todo Tratamiento de datos personales al cumplimiento de los principios de finalidad, libertad, transparencia, acceso y circulación restringida, entre otros, y a exigir autorización previa e informada del Titular (salvo en los casos en que expresamente la exceptúa). Ni la Ley 1581 ni el Decreto 1377 introducen una prohibición específica respecto de perfiles contruidos a partir de datos no sensibles, siempre que se respeten dichos principios y deberes. En consecuencia, la instrucción proyectada estaría creando una restricción nueva no prevista por el legislador para este tipo de Tratamientos.</p>	NO ACEPTADA	<p>No se acepta la observación. No obstante, se realiza un ajuste interpretativo con el fin de precisar su alcance y garantizar su plena armonización con el régimen legal vigente.</p> <p>En efecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, el tratamiento de datos sensibles se encuentra, como regla general, prohibido, salvo en los eventos expresamente previstos por la ley, entre ellos, cuando el Titular ha otorgado autorización previa, expresa e informada, o cuando resulte aplicable alguna de las demás excepciones legales. En ese sentido, la instrucción no pretende establecer una prohibición absoluta frente al tratamiento de datos sensibles ni frente a la elaboración de perfiles relacionados con ideología u opiniones políticas, siempre que dicho tratamiento se encuentre debidamente legitimado en los términos previstos por la ley.</p> <p>Esta precisión no introduce una categoría nueva de datos sensibles, ni amplía la definición contenida en el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012. Por el contrario, responde a una aplicación funcional del concepto de tratamiento de datos personales, conforme a la cual el análisis debe recaer sobre el resultado y los efectos del tratamiento, y no exclusivamente sobre la naturaleza formal de los datos de entrada. En consecuencia, cuando el resultado del tratamiento permita identificar o inferir ideología política u otros atributos sensibles, dicho resultado queda sujeto a las reglas propias de esta categoría.</p> <p>Así mismo, la instrucción no desconoce la licitud general del perfilamiento ni de la segmentación basados en datos personales no sensibles, incluidos los datos de naturaleza pública. Estas prácticas continúan siendo jurídicamente admisibles, siempre que se realicen en cumplimiento de los principios y deberes establecidos en la Ley 1581 de 2012 y su normativa reglamentaria, y cuenten con la base de legitimación correspondiente.</p>
42	19/12/2025	CCIT	<p>2.4. Respecto a las Instrucciones 7 y 8. Solicitamos respetuosamente la supresión de estas instrucciones.</p> <p>Por un lado, los principios de libertad y transparencia de la Ley 1581 de 2012 se relacionan con la necesidad de consentimiento del Titular para el tratamiento de sus datos o de un mandato legal o judicial que revele el consentimiento, y el derecho del Titular a obtener en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le concierne.</p> <p>Consecuentemente, no se deriva razonablemente de estos principios, ni lo establece la Ley 1581 de 2012 ni el Decreto 1377 de 2013, que existan las obligaciones para los Responsables y/o Encargados de estar en la capacidad de garantizar la comprensión del Titular sobre cómo se estructuran y usan sus datos para la entrega de mensajes políticos, así como el acceso a información de alta complejidad como "los criterios aplicados para la segmentación, las categorías de datos personales utilizados, la lógica general empleada para definir los grupos destinatarios, la fuente de los datos, el tipo de segmentación realizada, y si en el proceso se emplearon sistemas de inteligencia artificial", ni mucho menos mantener un registro documental de los criterios de segmentación utilizados en cada campaña digital.</p> <p>Por el contrario, el artículo 5 del Decreto 1377 de 2013 y el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012, únicamente exigen que el Responsable del Tratamiento informe de manera clara y expresa los datos personales que serán recolectados, el tratamiento al cual serán sometidos y la finalidad del mismo.</p> <p>Desde una perspectiva práctica, exigir este nivel de detalle sobre la forma en que se estructuran los mensajes políticos, impone una carga operativa y técnica significativa para partidos políticos, campañas, movimientos ciudadanos, organizaciones sociales y demás Responsables y Encargados que realizan actividades de publicidad, marketing o prospección política electoral. Este tipo de exigencias afectarían de manera injustificada la planificación y ejecución de campañas, dificultar la gestión eficiente de bases de datos y podría desalentar el uso responsable de herramientas tecnológicas que facilitan la comunicación con los ciudadanos y la difusión de información programática.</p> <p>Estas medidas podrían entenderse como buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas que pueden ser adoptadas voluntariamente por los Responsables y Encargados que así lo consideren adecuado para sus modelos de gestión de datos y de comunicación política, mas no como un deber jurídico exigible. Imponerlos como obligación genera a través de una circular excede el marco legal vigente, introduce cargas adicionales no previstas por las normas de protección de datos y desconoce el impacto que tales requerimientos tendrían en términos de recursos, capacidades técnicas y operación de las actividades legítimas de comunicación política y electoral. Por lo anterior, consideramos que no es procedente imponer estas obligaciones.</p>	NO ACEPTADA	<p>La Instrucción 7 se mantiene y la Instrucción 8 se elimina. Estas instrucciones desarrollan el principio de transparencia y el deber de información previstos en la Ley 1581 de 2012, particularmente en contextos de tratamiento de datos personales con fines políticos y electorales, en los cuales existe un mayor riesgo de afectación a los derechos fundamentales de los Titulares.</p> <p>En efecto, la exigencia de informar de manera clara, comprensible y accesible aspectos generales como los criterios aplicados para la segmentación, las categorías de datos personales utilizadas, la fuente de los datos, el tipo de segmentación realizada, la lógica general del tratamiento y el eventual uso de sistemas de inteligencia artificial, no implica la divulgación de estrategias políticas, modelos algorítmicos ni información técnica completa. Se trata de información orientada a permitir que el Titular comprenda por qué y para qué se utilizan sus datos y pueda ejercer su derecho a tener informada sus derechos, en concordancia con los artículos 11 y 12 de la Ley 1581 de 2012.</p> <p>La documentación a disposición de la SIC responde a una obligación clásica de cualquier régimen de protección de datos: permitir la verificación del cumplimiento normativo por parte de la autoridad competente. La SIC actúa dentro de su mandato legal al exigir medidas de transparencia y trazabilidad en uno de los escenarios de mayor riesgo para los derechos fundamentales, como lo es el uso de datos personales y técnicas de perfilamiento en campañas electorales.</p> <p>No obstante, se acoge la observación en lo relativo a la exigencia de mantener un registro documental específico de los criterios de segmentación utilizados, por cuanto dicha obligación podría interpretarse como una carga adicional no expresamente prevista en el régimen legal vigente de protección de datos personales. En consecuencia, se elimina la referencia al registro documental, sin perjuicio de las demás obligaciones generales de los Responsables y Encargados de demostrar el cumplimiento de la ley cuando ello sea requerido por la autoridad competente, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control.</p>
43	19/12/2025	Cámara Colombiana de Comercio Electrónico	<p>Instrucciones 2 y 4 Solicitamos respetuosamente que se incluya en estas instrucciones que el otorgamiento de autorización para el tratamiento de sus datos personales también se considera válido si se realiza por medio de conductas inequívocas por parte del Titular, y si únicamente por medio de autorización expresa.</p> <p>Estas instrucciones desconocen que la autorización por parte del Titular para el tratamiento de sus datos personales, además de poder ser expresa, conforme al artículo 7 del Decreto 1377 de 2013, también puede otorgarse mediante conductas inequívocas del Titular que permitan conocer de forma razonable que otorgó la autorización.</p> <p>Es indispensable que el Proyecto de Corral reconozca expresamente la validez de la autorización otorgada mediante conductas inequívocas del Titular, manteniendo la exigencia de autorización explícita para los casos de tratamiento de datos sensibles, tal y como lo prevé el marco normativo de protección de datos personales actual. Dicha exigencia no debe extenderse al resto de categorías de datos personales que pueden intervenir en el tratamiento con fines políticos y electorales y cuya obtención puede válidamente otorgarse mediante conductas inequívocas por parte del Titular. Cualquier interpretación distinta implicaría introducir, por vía administrativa, una carga adicional no contemplada por el legislador estatutario y generaría un estándar más estricto que el establecido en el régimen vigente.</p> <p>Así mismo, solicitamos respetuosamente la eliminación del término "libre" utilizado en ambas instrucciones para calificar la autorización del Titular. Este calificativo no es utilizado por la Ley 1581 de 2012 ni por el Decreto 1377 de 2013 como elemento autónomo o adicional de la autorización, por lo que su introducción supone incorporar una noción no prevista en la ley, lo que resulta indefinido y ambiguo, lo que podría generar inseguridad jurídica tanto para los Responsables y Encargados del Tratamiento, como para los propios Titulares, al no contar con un parámetro normativo claro sobre su significado y forma de cumplimiento.</p>	ACEPTADA PARCIALMENTE	<p>Se acoge parcialmente la observación. No obstante, la doctrina reiterada y consistente de la Superintendencia de Industria y Comercio ha interpretado que el tratamiento de datos personales sensibles requiere autorización expresa, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012. En consecuencia, el tratamiento de datos personales sensibles, que por regla general se encuentra prohibido y cuya prohibición solo puede expresamente en los casos expresamente previstos por la ley, exige como mínimo la autorización previa y expresa del Titular, sin que sea jurídicamente admisible su obtención mediante conductas inequívocas.</p> <p>Respecto del uso del término "libre", se acoge la observación y se elimina dicha expresión, sin que ello implique la alteración de los requisitos sustanciales de validez de la autorización establecidos en el régimen vigente de protección de datos personales.</p>
44	19/12/2025	Cámara Colombiana de Comercio Electrónico	<p>Instrucción 3 Solicitamos respetuosamente la eliminación del término "de manera visible" utilizado en esta instrucción.</p> <p>Ni la Ley 1581 de 2012 ni el Decreto 1377 de 2013 exigen que la política de Tratamiento de datos personales, los avisos de privacidad o los mecanismos de autorización se exhiban "de manera visible" en todos los canales de recolección. El Decreto 1377 se limita a establecer que: (i) las políticas de tratamiento deben constar en medio físico o electrónico, en lenguaje claro y sencillo y ser puestas en conocimiento de los Titulares; (ii) cuando no sea posible poner a disposición las políticas, el Responsable debe informar mediante aviso de privacidad sobre su existencia y la forma de acceder a ellas, a más tardar al momento de la recolección; y (iii) el aviso y las políticas pueden difundirse por diversos medios (documentos, formatos electrónicos, medios verbales o cualquier otra tecnología), siempre que se garantice el deber de informar, y que los procedimientos para el ejercicio de derechos "deben darse a conocer o ser fácilmente accesibles" para los Titulares. En ningún caso la norma eleva la "visibilidad" de dichos instrumentos a un estándar adicional o autónomo de cumplimiento.</p> <p>La introducción del calificativo "de manera visible" crea un requisito nuevo, sin definición legal ni parámetros objetivos sobre su alcance, que puede interpretarse de forma ambigua, por ejemplo, en cuanto al tamaño, ubicación o forma de presentación en interfaces físicas o digitales. Nuevamente, esto genera inseguridad jurídica para Responsables y Encargados al no existir un criterio normativo claro sobre cuándo se considera satisfecho. Desde esta perspectiva, resulta alineado al marco vigente mantener los estándares ya previstos por la Ley y el Decreto, en cuanto al deber de informar, ser puestas en conocimiento, y ser fácilmente accesibles, sin adicionar exigencias no contempladas.</p>	ACEPTADA PARCIALMENTE	<p>Se acoge parcialmente la observación.</p> <p>El uso del término "de manera visible" no pretende introducir un requisito autónomo ni adicional a los previstos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, sino reforzar el cumplimiento efectivo del deber de informar, en armonía con los estándares legales vigentes. En particular, debe interpretarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1581 de 2012, según el cual la información suministrada al Titular deberá ser de fácil lectura, no presentar barreras técnicas que impidan su acceso y corresponder en un todo a aquella que repose en la base de datos.</p> <p>En ese sentido, la referencia a la "visibilidad" se entiende como una concreción funcional de los criterios de accesibilidad, claridad y disponibilidad efectiva de la información, ya previstos en la normativa vigente, y no como la imposición de parámetros formales adicionales relacionados con tamaño, ubicación o diseño de los mecanismos de información.</p>
45	19/12/2025	Cámara Colombiana de Comercio Electrónico	<p>Instrucción 6 Solicitamos respetuosamente que esta instrucción sea eliminada, por cuanto desconoce tanto la definición legal del concepto de datos sensibles como la existencia de excepciones a la prohibición de su tratamiento expresamente previstas por la ley.</p> <p>Por un lado, en aplicación del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, el tratamiento de datos sensibles se encuentra permitido bajo determinados supuestos, entre ellos, que el Titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento. Por lo tanto, siempre que medie debida autorización por parte del Titular para el fin que corresponda, se podrá elaborar perfiles relacionados con su ideología política, así como perfiles basados en inferencias que permitan revelar dicha condición, incluidos otros datos sensibles definidos por la ley.</p> <p>En consecuencia, esta instrucción implicaría restringir de manera ilegítima actividades que la propia Ley 1581 de 2012 permite a los Responsables y Encargados del tratamiento, siempre que cuenten con autorización explícita y cumplan las demás obligaciones del régimen de protección de datos personales. Ello, además, desborda la competencia de la SIC, cuya función se limita a impartir instrucciones para la adecuada aplicación de la ley, mas no a prohibir o limitar usos que el legislador ha previsto como jurídicamente admisibles bajo condiciones específicas.</p> <p>Así mismo, precisamos que la Ley 1581 de 2012 no reconoce la categoría de "datos sensibles inferidos, deducidos o predichos". El artículo 5 de la ley define de manera delimitada qué debe entenderse por dato sensible, de forma que su alcance no puede ampliarse por vía de circular para incluir hipótesis no contempladas. Al afirmar que la misma prohibición se aplica a datos que "se inferen, deducen o predicen a partir de datos que, de manera aislada, no son sensibles", la instrucción introduce una categoría nueva que desborda la definición legal y termina modificando el contenido material del concepto de dato sensible, en contravía de la reserva de ley estatutaria en materia de derechos fundamentales y de las competencias estrictamente reguladas de la SIC.</p> <p>En todo caso, no existe una prohibición legal frente a la elaboración de perfiles, segmentaciones o inferencias como formas de Tratamiento de datos que de manera aislada no son sensibles, como, por ejemplo, los datos de naturaleza política. La norma se limita a someter todo Tratamiento de datos personales al cumplimiento de los principios de finalidad, libertad, transparencia, acceso y circulación restringida, entre otros, y a exigir autorización previa e informada del Titular (salvo en los casos en que expresamente la exceptúa). Ni la Ley 1581 ni el Decreto 1377 introducen una prohibición específica respecto de perfiles contruidos a partir de datos no sensibles, siempre que se respeten dichos principios y deberes. En consecuencia, la instrucción proyectada estaría creando una restricción nueva no prevista por el legislador para este tipo de Tratamientos.</p>	NO ACEPTADA	<p>No se acepta la observación. Conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, el tratamiento de datos sensibles se encuentra, como regla general, prohibido, salvo en los eventos expresamente previstos por la ley, entre ellos, cuando el Titular ha otorgado autorización previa, expresa e informada, o cuando resulte aplicable alguna de las demás excepciones legales. En ese sentido, la instrucción no pretende establecer una prohibición absoluta frente al tratamiento de datos sensibles ni frente a la elaboración de perfiles relacionados con ideología u opiniones políticas, siempre que dicho tratamiento se encuentre debidamente legitimado en los términos previstos por la ley.</p> <p>Esta precisión no introduce una categoría nueva de datos sensibles, ni amplía la definición contenida en el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012. Por el contrario, responde a una aplicación funcional del concepto de tratamiento de datos personales, conforme a la cual el análisis debe recaer sobre el resultado y los efectos del tratamiento, y no exclusivamente sobre la naturaleza formal de los datos de entrada. En consecuencia, cuando el resultado del tratamiento permita identificar o inferir ideología política u otros atributos sensibles, dicho resultado queda sujeto a las reglas propias de esta categoría.</p> <p>Así mismo, la instrucción no desconoce la licitud general del perfilamiento ni de la segmentación basados en datos personales no sensibles, incluidos los datos de naturaleza pública. Estas prácticas continúan siendo jurídicamente admisibles, siempre que se realicen en cumplimiento de los principios y deberes establecidos en la Ley 1581 de 2012 y su normativa reglamentaria, y cuenten con la base de legitimación correspondiente.</p>

46	19/12/2025	Cámara Colombiana de Comercio Electrónico	<p>Instrucciones 7 y 8.</p> <p>Solicitamos respetuosamente la supresión de estas instrucciones.</p> <p>Por un lado, los principios de libertad y transparencia de la Ley 1581 de 2012 se relacionan con la necesidad de consentimiento del Titular para el tratamiento de sus datos o de un mandato legal o judicial que releve el consentimiento, y el derecho del Titular a obtener en cualquier momento la restricción o exclusión de la existencia de datos que le conciernen.</p> <p>Consecuentemente, no se deriva razonablemente de estos principios, ni lo establece la Ley 1581 de 2012 ni el Decreto 1377 de 2013, que existan las obligaciones para los Responsables y/o Encargados de estar en la capacidad de garantizar la comprensión del Titular sobre cómo se estructuró el uso de sus datos para la entrega de mensajes políticos, así como tampoco información de alta complejidad como "los criterios aplicados para la segmentación, las categorías de datos personales utilizadas, la lógica general empleada para definir los grupos destinatarios, la fuente de los datos, el tipo de segmentación realizada, y si en el proceso se emplearon sistemas de inteligencia artificial", ni mucho menos mantener un registro documental de los criterios de segmentación utilizados en cada campaña digital.</p> <p>Por el contrario, el artículo 5 del Decreto 1377 de 2013 y el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012, únicamente exigen que el Responsable del Tratamiento informe de manera clara y expresa los datos personales que serán recolectados, el tratamiento al cual están sometidos y la finalidad del mismo.</p> <p>Desde una perspectiva práctica, exigir este nivel de detalle sobre la forma en que se estructuran los mensajes políticos, impone una carga operativa y técnica significativa para partidos políticos, campañas, movimientos ciudadanos, organizaciones sociales y demás Responsables y Encargados que realizan actividades de publicidad, marketing o prospección política y electoral. Este tipo de exigencias afectaría de manera injustificada la planificación y ejecución de campañas, dificultaría la gestión eficiente de bases de datos y podría desalentar el uso responsable de herramientas tecnológicas que facilitan la comunicación con los ciudadanos y la difusión de información programática.</p> <p>Estas medidas podrían entenderse como buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas que pueden ser adoptadas voluntariamente por los Responsables y Encargados que así lo consideren adecuado para sus modelos de gestión de datos y de comunicación política, mas no como un deber jurídico exigible. Imponerlas como obligación general a través de una circular excede el marco legal vigente, introduce cargas adicionales no previstas por las normas de protección de datos y desconoce el impacto que tales requerimientos tendrían en términos de recursos, capacidades técnicas y operación de las actividades legítimas de comunicación política y electoral. Por lo anterior, consideramos que no es procedente imponer estas obligaciones.</p>	ACEPTADA PARCIALMENTE	<p>La Instrucción 7 se mantiene y la Instrucción 8 se elimina. Estas instrucciones desarrollan el principio de transparencia y el deber de información previstos en la Ley 1581 de 2012, particularmente en contextos de tratamiento de datos personales con fines políticos y electorales, en los cuales existe un mayor riesgo de afectación a los derechos fundamentales de los Titulares.</p> <p>En efecto, la exigencia de informar de manera clara, comprensible y accesible aspectos generales como los criterios aplicados para la segmentación, las categorías de datos personales utilizadas, la fuente de los datos, el tipo de segmentación realizada, la lógica general del tratamiento y el eventual uso de sistemas de inteligencia artificial, no implica la divulgación de estrategias políticas, modelos algorítmicos ni información técnica compleja. Se trata de información orientada a permitir que el Titular comprenda por qué y para qué se utilizan sus datos y pueda ejercer de manera informada sus derechos, en concordancia con los artículos 11 y 12 de la Ley 1581 de 2012.</p> <p>La documentación a disposición de la SIC responde a una obligación clásica de cualquier régimen de protección de datos: permitir la verificación del cumplimiento normativo por parte de la autoridad competente. La SIC actúa dentro de su mandato legal al exigir medidas de transparencia y trazabilidad en uno de los escenarios de mayor riesgo para los derechos fundamentales, como lo es el uso de datos personales y técnicas de perfilamiento en campañas electorales.</p> <p>No obstante, se acoge la observación en lo relativo a la exigencia de mantener un registro documental específico de los criterios de segmentación utilizados, por cuanto dicha obligación podría interpretarse como una carga adicional no expresamente prevista en el régimen legal vigente de protección de datos personales. En consecuencia, se elimina la referencia al registro documental sin perjuicio de las demás obligaciones generales de los Responsables y Encargados de demostrar el cumplimiento de la ley cuando ello sea requerido por la autoridad competente, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control.</p>
47	19/12/2025	Cámara Colombiana de Comercio Electrónico	<p>Instrucción 9.</p> <p>Con respecto a la Instrucción 9 consideramos que la redacción actual (i) impone obligaciones de resultado que no son compatibles con el principio de responsabilidad demostrada ni con el rol de las plataformas como intermediarios tecnológicos y (ii) se refiere a escenarios que ya son regulados en la legislación vigente tanto en el marco penal como de consumidor.</p> <p>En relación con la obligación incluida en el proyecto de circular para los sujetos vigilados de "abstenerse de generar, utilizar, difundir o promover contenidos sintéticos conocidos como deepfakes que involucren datos personales", consideramos que su redacción implica una obligación de resultado que no es proporcional con el régimen de protección de datos establecido en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1377 de 2013.</p> <p>La obligación de resultado que se impone en el proyecto de circular no es coherente con el principio de responsabilidad demostrada establecido en el artículo 26 del Decreto 1377 de 2013. Este artículo exige que los responsables del tratamiento sean capaces de demostrar que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones establecidas en el régimen de protección de datos. Además, las medidas deben ser proporcionales a la naturaleza jurídica del responsable, la naturaleza de los datos, el tratamiento y los riesgos potenciales sobre los derechos del titular. En este sentido, la responsabilidad demostrada se configura como una obligación de proceso, orientada a probar la debida diligencia en la prevención, detección y corrección de riesgos.</p> <p>Sin embargo, el proyecto de circular trasladado de manera generalizada a todos los sujetos vigilados, con independencia de su rol o capacidad de control, un riesgo desproporcionado y materialmente imposible de garantizar, en particular frente a contenidos generados y difundidos por terceros, lo cual desborda el alcance normativo del principio de responsabilidad demostrada. Bajo esta misma perspectiva, es importante resaltar que la Instrucción 9 implica una obligación de resultado para las plataformas tecnológicas por los contenidos generados por terceros con fines políticos o electorales, en especial los relacionados con actividades de publicidad, marketing o prospección política y electoral. Sin embargo, las plataformas actúan como intermediarias de servicios de la sociedad de la información, cuya función es esencialmente tecnológica y neutral, limitada a facilitar la transmisión, alojamiento o difusión de contenidos creados por otros. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que las plataformas:</p> <p>"tienen un rol dual: i) pasivo facilitando el proceso de transmisión y difusión de un contenido más no toman decisiones sobre la difusión, es decir, "dan acceso, alojamiento, transmisión e indexación a contenidos, productos y servicios que se crean en terceros", escenario donde facilitan la libertad de expresión; y ii) activo en la medida que pueden adoptar un modelo de negocios basado en datos, lo que implica que "a partir de la recolección y análisis descriptivo y prescriptivo de los datos de sus usuarios, las compañías como Facebook y Google formulan "modelos de negocios que confían en los datos como un recurso clave para extraer valor económico social".</p> <p>(...)</p> <p>De esta forma, la Corte Constitucional ha referido que los intermediarios de Internet no son responsables por el contenido.</p>	ACEPTADA	<p>Se elimina la Instrucción sobre contenido sintético ultra falso (deepfakes). Se acoge el comentario que sugiere su eliminación, si bien se sugirieron alternativas intermedias también. El alcance de la Instrucción se limitaba a recordar que la generación, utilización o difusión de contenidos sintéticos que impliquen la suplantación de una persona identificable mediante el uso de datos personales puede constituir una forma de tratamiento ilícito de datos, además de eventualmente configurar responsabilidades en otros ámbitos del ordenamiento jurídico. Sin embargo, se opta por su eliminación.</p>
48	18/12/2025	Risk Consulting Global Group	<p>Observación general sobre la competencia regulatoria.</p> <p>Si bien el proyecto como fundamento de su competencia el artículo 21, literal e), de la Ley 1581 de 2012, es importante recordar que el régimen de habebas data tiene carácter estatutario y que la creación de nuevas obligaciones o la restricción de derechos fundamentales solo puede hacerse mediante ley expedida por el Congreso. Por ello, se insta a la Superintendencia a ceñir sus instrucciones al marco normativo vigente y abstenerse de extender o modificar el alcance de la Ley 1581 a supuestos no contemplados expresamente en ésta.</p>	NO ACEPTADA	<p>La Circular no regula la actividad electoral ni define la forma en que deben desarrollarse las campañas políticas, materias que corresponden a las autoridades electorales en el marco de sus competencias constitucionales y legales. El objeto de las instrucciones se circunscribe de manera exclusiva al tratamiento de datos personales cuando este se realiza con fines políticos o electorales, ámbito respecto del cual la Superintendencia ejerce competencias expresas como Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.</p> <p>En ese sentido, las medidas contenidas en la Circular no introducen reglas sustantivas sobre propaganda, publicidad electoral o estrategias de campaña, sino que reiteran y desarrollan la aplicación del régimen general de protección de datos personales a un contexto específico de tratamiento que presenta riesgos reforzados para los derechos fundamentales de los titulares, en particular cuando involucra datos sensibles, perfilamiento, segmentación o inferencias.</p> <p>Debe recordarse que el artículo 21 de la Ley 1581 de 2012 faculta expresamente a esta Superintendencia para velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales e impartir instrucciones sobre las medidas y procedimientos necesarios para la adecuación de las operaciones de los Responsables y Encargados del Tratamiento a dicha normativa. La Corte Constitucional ha reconocido de manera reiterada que estas funciones hacen parte de la potestad de policía administrativa y comprenden la emisión de instrucciones generales dirigidas a prevenir riesgos y garantizar la efectividad del derecho fundamental al habebas data (sentencias C-1011 de 2008 y C-748 de 2011).</p> <p>Adicionalmente, la Corte Constitucional ha advertido que el tratamiento de datos personales en contextos políticos y electorales puede generar impactos significativos sobre otros derechos fundamentales y sobre el funcionamiento de la democracia, especialmente cuando se utilizan técnicas de segmentación, microsegmentación o inferencia a partir de datos sensibles. En este escenario, resulta no solo legítimo sino necesario que la autoridad de protección de datos precise los estándares mínimos de cumplimiento del régimen de habebas data, sin que ello implique una intromisión en la regulación electoral.</p>
49	18/12/2025	Risk Consulting Global Group	<p>2. Instrucción 2 – Autorización para el tratamiento de datos.</p> <p>El proyecto exige contar con autorización previa, expresa e informada para cualquier tratamiento de datos con fines políticos. No obstante, la Ley 1581 prevé excepciones en las que no se requiere dicha autorización, entre ellas el uso de datos de naturaleza pública. Se solicita que la Circular reconozca estas excepciones, de manera que no se impida el uso legítimo de fuentes públicas ni se generen cargas adicionales no previstas por la ley.</p>	ACEPTADA	<p>Se ajusta la Instrucción para precisar que el tratamiento de datos personales sensibles es jurídicamente admisible cuando exista autorización previa, expresa e informada del Titular, o cuando concurre alguna de las excepciones previstas en la ley.</p>
50	18/12/2025	Risk Consulting Global Group	<p>3. Instrucción 3 – Información a grupos de interés.</p> <p>Se propone reemplazar la prohibición absoluta de añadir personas a grupos de mensajería o listas de distribución sin autorización previa. El acceso a datos públicos y la posibilidad de contactar a potenciales simpatizantes constituye parte esencial de la actividad política. Resulta recomendable diferenciar entre la utilización legítima de directorios públicos, con mecanismos claros para que los destinatarios puedan oponerse a recibir comunicaciones, y prácticas de recolección masiva de datos que no cumplen con los principios de la ley.</p>	ACEPTADA PARCIALMENTE	<p>En relación con la Instrucción 4, se ajusta el texto con el fin de aclarar expresamente el tratamiento de datos de naturaleza pública, incluidos aquellos obtenidos mediante herramientas automatizadas de extracción de información (web scraping), precisando que dicho tratamiento no requiere autorización del Titular cuando se realice en los términos previstos por la Ley 1581 de 2012 y en estricto cumplimiento de los principios y obligaciones del régimen de protección de datos personales.</p>
51	18/12/2025	Risk Consulting Global Group	<p>4. Instrucción 6 – Perfilamiento y datos sensibles.</p> <p>Valoramos la protección reforzada de los datos sensibles y la prohibición de inferir la ideología política de los Titulares. Sin embargo, debe precisarse que la segmentación basada en datos no sensibles (por ejemplo, edad, ubicación o intereses generales) es un instrumento legítimo para la difusión de mensajes, siempre que se respeten los principios de finalidad y transparencia y se informe a los Titulares sobre su uso. También se sugiere armonizar esta prohibición con la excepción prevista en el artículo 6 c) de la Ley 1581, que permite a partidos y movimientos políticos tratar datos sensibles de sus miembros y personas con las que mantienen contacto regular, sin suministrarlos a terceros.</p>	ACEPTADA PARCIALMENTE	<p>La Instrucción 6 tiene por objeto prohibir el perfilamiento o la segmentación en general, sino reiterar que cuando el resultado del tratamiento implique la revelación o inferencia de la ideología política u otros datos sensibles, se active el régimen reforzado de protección previsto en la ley. Se ajusta parcialmente la Instrucción 6 para reconocer que el tratamiento de datos personales sensibles es viable cuando concurren las circunstancias previstas en la ley.</p> <p>Por otro lado, la Instrucción 10 establece desarrolla el principio de información previsto en el literal c) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, precisando que los partidos y movimientos políticos podrán tratar datos sensibles de sus miembros o de personas con las que mantienen contacto regular, siempre que dicho tratamiento se limite a sus finalidades legítimas, no se suministre a terceros y se respeten las demás condiciones previstas en la norma.</p>
52	18/12/2025	Risk Consulting Global Group	<p>5. Instrucción 7 y 8 – Transparencia y registro de segmentación.</p> <p>Compartimos la necesidad de mayor transparencia sobre los criterios de segmentación utilizados en campañas digitales. No obstante, la obligación de llevar un registro documental detallado puede resultar onerosa para campañas pequeñas y exponer estrategias internas. Se solicita que la Superintendencia establezca criterios de proporcionalidad o umbrales que determinen cuándo es obligatorio dicho registro, así como mecanismos de confidencialidad para proteger la información estratégica.</p>	ACEPTADA PARCIALMENTE	<p>La Instrucción 7 se mantiene y la Instrucción 8 se elimina. Estas instrucciones desarrollan el principio de transparencia y el deber de información previstos en la Ley 1581 de 2012, particularmente en contextos de tratamiento de datos personales con fines políticos y electorales, en los cuales existe un mayor riesgo de afectación a los derechos fundamentales de los Titulares.</p> <p>En efecto, la exigencia de informar de manera clara, comprensible y accesible aspectos generales como los criterios aplicados para la segmentación, las categorías de datos personales utilizadas, la fuente de los datos, el tipo de segmentación realizada, la lógica general del tratamiento y el eventual uso de sistemas de inteligencia artificial, no implica la divulgación de estrategias políticas, modelos algorítmicos ni información técnica compleja. Se trata de información orientada a permitir que el Titular comprenda por qué y para qué se utilizan sus datos y pueda ejercer de manera informada sus derechos, en concordancia con los artículos 11 y 12 de la Ley 1581 de 2012.</p> <p>La documentación a disposición de la SIC responde a una obligación clásica de cualquier régimen de protección de datos: permitir la verificación del cumplimiento normativo por parte de la autoridad competente. La SIC actúa dentro de su mandato legal al exigir medidas de transparencia y trazabilidad en uno de los escenarios de mayor riesgo para los derechos fundamentales, como lo es el uso de datos personales y técnicas de perfilamiento en campañas electorales.</p> <p>No obstante, se acoge la observación en lo relativo a la exigencia de mantener un registro documental específico de los criterios de segmentación utilizados, por cuanto dicha obligación podría interpretarse como una carga adicional no expresamente prevista en el régimen legal vigente de protección de datos personales. En consecuencia, se elimina la referencia al registro documental sin perjuicio de las demás obligaciones generales de los Responsables y Encargados de demostrar el cumplimiento de la ley cuando ello sea requerido por la autoridad competente, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control.</p>
53	18/12/2025	Risk Consulting Global Group	<p>6. Instrucción 9 – Contenidos sintéticos o deepfakes.</p> <p>La prevención de la desinformación y el uso indebido de la imagen de las personas es fundamental. No obstante, se recuerda que la persecución de los delitos asociados a la generación y difusión de deepfakes corresponde a las autoridades competentes en materia penal y electoral. La Circular debería circunscribirse al tratamiento de datos personales y coordinar con dichas entidades para abordar los riesgos de los contenidos sintéticos.</p>	ACEPTADA	<p>Se sugiere su eliminación, si bien se sugirieron alternativas intermedias también. El alcance de la Instrucción se limitaba a recordar que la generación, utilización o difusión de contenidos sintéticos que impliquen la suplantación de una persona identificable mediante el uso de datos personales de carácter público o de personas con las que mantienen contacto regular, siempre que dicho tratamiento se limite a sus finalidades legítimas, no se suministre a terceros y se respeten las demás condiciones previstas en la norma.</p>
54	18/12/2025	Risk Consulting Global Group	<p>7. Instrucción 10 – Comunicaciones a miembros y simpatizantes.</p> <p>Los movimientos políticos y movimientos políticos a sus miembros y seguidores regulares. Solicitamos aclarar que las organizaciones políticas pueden enviar información a simpatizantes o potenciales seguidores que hayan otorgado su consentimiento o cuyos datos sean de naturaleza pública, siempre que se respeten los principios de la ley y se otorgue la posibilidad de oposición.</p>	NO ACEPTADA	<p>En primer lugar, la Instrucción 10 no limita las comunicaciones de partidos y movimientos políticos, sino que reitera y desarrolla el principio de información previsto en el literal c) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, precisando que los partidos y movimientos políticos podrán tratar datos sensibles de sus miembros o de personas con las que mantienen contacto regular, siempre que dicho tratamiento se limite a sus finalidades legítimas, no se suministre a terceros y se respeten las demás condiciones previstas en la norma.</p>
55	18/12/2025	Misión de Observación Electoral	<p>Instrucción 1</p> <p>Sí considera conveniente que se incorpore de manera expresa un enfoque de debida diligencia continua, que permita operacionalizar dichos deberes en contextos de publicidad, marketing o prospección política.</p> <p>En particular, se recomienda que la circular promueva la adopción de medidas preventivas, técnicas y organizacionales orientadas a la identificación, evaluación y mitigación de riesgos a lo largo del ciclo de vida del dato personal, tales como mecanismos de monitoreo interno, evaluación periódica de riesgos y capacitación del personal involucrado, con el fin de asegurar un cumplimiento efectivo y verificable del régimen de protección de datos personales, 6 más allá de la adopción formal de políticas o manuales internos.</p>	ACEPTADA	<p>Se incorpora a la primera instrucción un nuevo párrafo para promover la debida diligencia.</p>
56	18/12/2025	Misión de Observación Electoral	<p>Instrucción 3</p> <p>Se sugiere que la circular indique que los mismos canales, interfaces o puntos de contacto utilizados para la recolección de datos personales en actividades de publicidad, marketing o prospección política deben permitir, de forma sencilla, clara y visible, el ejercicio de los derechos de corrección, actualización, supresión y revocatoria de la autorización.</p> <p>Esta precisión resulta consistente con las competencias de la SIC para garantizar el ejercicio efectivo del derecho fundamental al habebas data y prevenir escenarios de uso continuado de datos inexactos, desactualizados o carentes de consentimiento vigente.</p>	ACEPTADA	<p>Se acepta la sugerencia y se integra como una nueva instrucción.</p>

57	18/12/2025	Misión de Observación Electoral	<p>Instrucción 6</p> <p>Se considera pertinente reforzar esta prohibición mediante una recomendación expresa de limitación de los criterios de segmentación utilizados en actividades de publicidad, marketing o prospección política y electoral. En la práctica, la combinación de múltiples variables no sensibles puede producir efectos equivalentes al tratamiento de datos sensibles, dando lugar a formas de perfilamiento indirecto difíciles de identificar y controlar.</p> <p>Por ello, se sugiere que la circular incorpore un criterio orientador que promueva el uso acotado, proporcional y estrictamente necesario de variables de segmentación, de modo que se reduzca el riesgo de inferencias indebidas sobre la ideología política u otras condiciones protegidas por la ley, aun cuando no exista un tratamiento directo de datos sensibles.</p>	ACEPTADA PARCIALMENTE	Se acepta la sugerencia y se integra dentro de la redacción de la Instrucción 7 así como en la Instrucción 8, en tanto se precisan los límites del perfilamiento.
58	18/12/2025	Misión de Observación Electoral	<p>Instrucción 7</p> <p>La divulgación detallada de los criterios aplicados en cada proceso de segmentación, de las categorías específicas de datos utilizadas, de la lógica general de agrupación de destinatarios o del uso de sistemas de inteligencia artificial puede no resultar operativa ni adecuada cuando se incorpora de manera exclusiva en las Políticas de Tratamiento de Datos Personales, las cuales, por su naturaleza, tienen un carácter general y permanente. En la práctica, esta información es dinámica, contextual y dependiente de campañas, mensajes o estrategias específicas.</p> <p>En ese sentido, se sugiere que la circular promueva el uso de mecanismos complementarios de transparencia, tales como avisos específicos asociados a piezas publicitarias, canales de consulta accesibles u otros espacios informativos vinculados a la publicidad política, que permitan al titular conocer de manera clara y comprensible los criterios aplicados en cada caso concreto, sin desnaturalizar la función de las Políticas de Tratamiento de Datos Personales.</p>	ACEPTADA	Se acepta la sugerencia y se integra dentro de la redacción de la Instrucción 8.
59	18/12/2025	Misión de Observación Electoral	<p>Instrucción 9</p> <p>Se considera pertinente complementar el enfoque adoptado mediante orientaciones de carácter preventivo y pedagógico, dirigidas a reducir riesgos en aquellos escenarios en los que se utilicen contenidos sintéticos sin finalidad engañosa o de suplantación. En estos casos, resulta aconsejable promover el uso de mecanismos claros de identificación —como etiquetas visibles, marcas de agua, advertencias explícitas o metadatos— que permitan a la ciudadanía reconocer de forma inmediata la naturaleza sintética del contenido.</p> <p>Adicionalmente, se sugiere precisar que la suplantación de identidad y la atribución falsa de actos o manifestaciones a una persona no se limita al uso de contenidos sintéticos conocidos como deepfakes, sino que puede materializarse a través de otros formatos o técnicas, digitales o no, que impliquen el tratamiento indebido de datos personales.</p>	NO ACEPTADA	Se elimina la Instrucción sobre contenido sintético ultra falso (deepfakes). Se acoge el comentario que sugiere su eliminación, si bien se sugirieron alternativas intermedias también. El alcance de la Instrucción se limitaba a recordar que la generación, utilización o difusión de contenidos sintéticos que impliquen la suplantación de una persona identificable mediante el uso de datos personales puede constituir una forma de tratamiento ilícito de datos, además de eventualmente configurar responsabilidades en otros ámbitos del ordenamiento jurídico. Sin embargo, se opta por su eliminación.